

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

S U M A R I O

Ministerio de Ganadería y Agricultura

¹
Decreto. Se reglamentan los préstamos de semillas de trigo.

Ministerio de Industrias y Trabajo

²
Decreto. Se modifican disposiciones del Reglamento para

el trabajo del personal lanchonero del Puerto de Montevideo.

Suprema Corte de Justicia

³
Circular Nº 16 (Acordada Nº 3.142. — Se fijan fecha y condiciones para la Visita de Cárceles y Causas en el interior.

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO

MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA

¹
Decreto. Se reglamentan los préstamos de semillas de trigo
Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Montevideo, 9 de junio de 1952.

Vista la ley de fecha 14 de mayo de 1952, (*) por la cual se mantiene, por el presente año, la vigencia de las leyes Nº 10.904, de 22 de abril de 1947; Nº 11.064, de 12 de mayo de 1948; Nº 11.414, de 21 de abril de 1950, y número 11.653, de 17 de marzo de 1951, sobre préstamos de semillas de trigo a los agricultores.

Resultando que por el artículo 2º de la ley citada en primer término, se autoriza al Poder Ejecutivo a fijar, hasta en un 15 o/o, el porcentaje de trigo a devolver al Estado, en más de la cantidad recibida por los agricultores que se acojan al régimen de préstamos y opten por el pago en especie, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5º de la referida ley Nº 10.904.

Considerando que la finalidad que persigue el Estado, con la vigencia del sistema de préstamos, es obtener que las siembras de dicho cereal se realicen en las mayores áreas posibles, a fin de asegurar, aún previendo eventuales adversidades climáticas, una producción suficiente para atender las necesidades del país.

Que el éxito de tales medidas ha sido evidente, por cuanto de una producción en déficit como era la triguera, hasta hace pocos años, ha pasado a volúmenes que han permitido registrar saldos exportables, originando, no sólo economía de divisas, sino produciéndolas a su vez.

Que tal política de estímulo debe proseguir; por tanto, una forma eficaz de coadyuvar con la finalidad de la ley, es menester, para el año en curso, el porcentaje en más que rigió durante 1951, máxime si se tiene en cuenta que se está frente a una simple prórroga del régimen vigente en ese año.

El Consejo Nacional de Gobierno

DECRETA:

Artículo 1º Los agricultores que se acojan a los beneficios del régimen de préstamos de semillas de trigo y que, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 5º de la ley 10.904, de fecha 22 de abril de 1947, opten por la devolución en especie, deberán entregar, en oportunidad de saldar su deuda, la cantidad recibida, más el 10 o/o (diez por ciento) de dicha cantidad.

Art. 2º Comuníquese, publíquese, etc.

Por el Consejo: MARTINEZ TRUEBA. — JUAN T. QUI-
LICI. — Eduardo Jiménez de Aréchaga, Secretario.

(*) Publicada en el Nº 13.642 (21 de mayo).

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO

²
Decreto. Se modifican disposiciones del Reglamento para el trabajo del personal lanchonero del Puerto de Montevideo.

Ministerio de Industrias y Trabajo.

Montevideo, 9 de junio de 1952.

Visto el proyecto de modificaciones al Reglamento de trabajo del personal lanchonero del Puerto de Montevideo.

Resultando: I) El mencionado proyecto modifica once de las treinta y nueve normas del Reglamento de trabajo aprobado por decreto de 28 de febrero de 1951, y el régimen del llamado del tercer turno a que alude el artículo 7º del decreto de 11 de enero de 1947, contando con la aquiescencia de patronos y trabajadores.

II) Del estudio detenido de las modificaciones surge que las relacionadas con los artículos 6º, 13, 20, 25, 28, 31, 32, 35, 36 y 40, introducen variantes afirmativas desde el punto de vista del costo de las operaciones, al Reglamento vigente; sólo la relacionada con el artículo 2º se traduce en un factor negativo, pues determina en la operación de recepción de cueros salados y pelados secos en lingadas la utilización de seis trabajadores en lugar de cuatro.

Considerando: Que al balancear las modificaciones en vista se aprecia una mejora que favorece, por una mayor economía, el desenvolvimiento de los trabajos de lanchaje de nuestro puerto y promueve un mayor rendimiento en la mano de obra, lo que evidencia la buena voluntad de las partes en ajustar la reglamentación a dictados que consultan, además los intereses de los trabajadores, los de la economía general.

De acuerdo con lo informado por la Asesoría Técnica del Ministerio, lo aconsejado por la Comisión Administradora de los Servicios de Estiba y el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados; y

Atento: A lo que previene el artículo 4º de la ley número 10.755,

El Consejo Nacional de Gobierno

DECRETA:

Artículo 1º Modifícanse con arreglo a las siguientes disposiciones los artículos 2º, 6º, 13, 20, 25, 28, 31, 32, 35, 36 y 40, del Reglamento del trabajo para trabajadores Lancheros del Puerto de Montevideo, de fecha 28 de febrero de 1951.

"Artículo 2º Cueros salados y salados secos.

Recibir con canaleta, 4 hombres.

Recibir en lingada, 6 hombres.

Si la lingada va al corredor o si es a pasamano, 8 hombres.

Para entregar, 6 hombres.

Si están a granel, 8 hombres.

Las lingadas se harán como máximo de 30 cueros vacunos o 50 cueros de becerro".

"Artículo 6º En general no se entregará ni recibirá más de un fardo de los que se refieren los dos artículos anteriores, cuando el peso de dicho fardo pase de 250 kilos".

"Artículo 13. Bolserío. Se procederá de la siguiente forma:

Peso de las bolsas	Con 4 hombres	Con 6 hombres
Hasta de 45 kilos,	lingada de 15 bolsas	
De 46 a 60 "	" " 12 "	15 bolsas
De 61 a 70 "	" " 10 "	12 "
De 71 a 80 "	" " 8 "	10 "
De 81 a 90 "	" " 6 "	8 "
De 91 a 100 kilos,	se llevarán 6 hombres y las lingadas	
se harán de 8 bolsas.		

Si pesan más de 101 kilos, se llevarán 6 hombres y se hará la lingada de hasta 6 bolsas.

- A) Si las bolsas están a granel, se llevarán dos hombres más de lo indicado en cada caso.
 B) Para recibir por canaleta: Hasta un plan arriba de la "mastra", y hombres. Levantando "troja", 8 hombres.
 Lo mismo para otras cargas que se reciben en canaleta".

"Artículo 20. Tanques, tambores, pipas, etc.
 Para recibir o entregar con "gafa", 1 hombre.
 Para recibir o entregar lingadas, 4 hombres.
 Tambores de soda cáustica o similares de más de 300 kilos de peso:

Para recibir de a dos tambores con gafa, 4 hombres.
 Para recibir o entregar de a dos lingadas, 6 hombres.
 Para recibir o entregar de a una lingada, 4 hombres.
 Para entregar, 1 hombre por gafa".
 "Artículo 25. Madera.
 Para recibir o entregar, 6 hombres.
 Las lingadas de tablas chicas se harán hasta de 30 piezas y las de tablas grandes, hasta de 25 piezas.
 Cuando la lingada no entre hasta el centro de la bodega, las lingadas se harán de 25 y 20 tablas respectivamente.
 Cuando la madera venga en atados se recibirán los atados equivalentes a 45 piezas.
 Recibir o entregar a pasamano, 8 hombres".

"Artículo 28. Cueros atados.
 Recibir virando la linga, en canaleta y haciendo una pared, 4 hombres.
 Recibir estibando, 6 hombres.
 Entregar en lingadas equivalentes a 30 cueros, 4 hombres.
 Entregar en lingadas mayores, 6 hombres".

"Artículo 31. Fardos de descarné, pulpa o pasta de madera, cartón, etc.

Para entregar o recibir, 4 hombres.
 En estos fardos u otros similares, el peso total de la lingada, no pasará de 600 kilos. Pasando se llevarán 6 hombres".

"Artículo 32. Cuando se tenga que hacer removido se llevará doble personal, cuando dicho removido pase de cinco lingadas.

Cuando se trate de salvataje, cargas mojadas, cargas en estado de descomposición o cargas cuya temperatura pase de 50 grados, se pagará doble salario".

"Artículo 35. Tambores vacíos.
 Recibir o entregar con linga de cabo o red, 4 hombres.
 La lingada será de 9 tambores".

"Artículo 36. Carburo.
 Recibir o entregar:
 En linga de cabo, hasta 10 tachos de 53 kilos, 4 hombres.
 En linga de cabo, hasta 5 tachos de más peso, 4 hombres.
 En linga de red, 8 tachos, hasta de 53 kilos, 4 hombres.
 En linga de red, tachos de más peso, 6 hombres".
 "En el artículo 40. Los siguientes apartados: Cueros salados o salados secos.

Estibados:

Hasta 500 vacunos u 800 becerros, 2 hombres.
 Hasta 1.200 vacunos o 1.650 becerros, 4 hombres.

A granel:

Hasta 500 cueros, 4 hombres.
 Hasta 1.200 cueros, 6 hombres.
 Y la sal perteneciente a estos cueros.
 Fardos de lana, cueros o arpillera.
 Hasta 20 fardos, 2 hombres.

Bolsas.

Hasta de 70 kilos, 250 bolsas, 2 hombres.
 De más de 70 kilos, 150 bolsas, 2 hombres.
 De más de 70 kilos, 150 a 200 bolsas, 4 hombres.

Si está a granel dos hombres más en cada caso.
 Cajones de conserva, kerosene, aguarrás, etc.

Hasta 250 cajones, 2 hombres.
 De 250 a 1.500 chicos, de 14 kilos, 4 hombres.
 De 250 a 1.000 medianos, de 26 kilos, 4 hombres.

Rollos de suela o descarné.

Hasta 150 rollos, 2 hombres.
 Fardos de descarné, cartón, yute, rayón, etc., lingadas:
 Hasta 50 fardos, 2 hombres.

Tambores vacíos.

Hasta 150 tambores, 2 hombres.

Pipas o tambores de más de 300 kilos de peso.

Hasta 50 pipas o tambores, 4 hombres.

Bultos de inflamables en la isla o de la isla.
 Hasta 3 toneladas, 2 hombres".

Art. 2º Modificase el régimen del llamado del tercer turno dispuesto por el artículo 7º del decreto de 11 de enero de 1947, por el siguiente:

"El nombramiento del tercer turno se hará de 17 y 10 a 17 y 30 horas. Se nombrará a las 16 y 45 en el caso de haber pedido para la hora 17".

Art. 3º Comuníquese y publíquese.

Por el Consejo: MARTINEZ TRUEBA. — HECTOR A. GRAUERT. — Eduardo Jiménez de Aréchaga, Secretario.

PODER JUDICIAL

Supremo Corte de Justicia

8

Circular Nº 16 (Acordada Nº 3.142). — Se fijan fecha y condiciones para la Visita de Cárcels y Causas en el interior.

Montevideo, 12 de junio de 1952.

Esta Secretaría transcribe para su conocimiento y demás efectos, la Acordada Nº 3.142 dictada en fecha 6 del corriente por la Suprema Corte de Justicia, y que se refiere a la Visita de Cárcels y Causas a efectuarse en los Departamentos del interior:

"Nº 3.142. En Montevideo, a seis de junio de mil novecientos cincuenta y dos, estando en audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores don Rivera Astigarraga, Presidente, don Francisco Gamarra, don Alvaro F. Macedo, don Manuel López Esponda, por ante el infrascripto Secretario, dijo:

1º Que fija el día primero de agosto del corriente año para la iniciación de la Visita de Cárcels y Causas, la que se efectuará en esa fecha en los Departamentos del interior.

2º Que el expresado acto será presidido en dichos Departamentos por el señor Juez Letrado de Primera Instancia respectivo, excepto en los de Canelones, Paysandú y Salto, en que lo será por el correspondiente Juez Letrado de Primera Instancia de segundo turno.

3º Que deberán concurrir a ese acto, en los Departamentos de Canelones, Paysandú y Salto, los señores Jueces Letrados de Primera Instancia de primer turno respectivos. En los citados Departamentos y en los demás del interior, concurrirán asimismo, los señores Defensores de Oficio.

4º Que los Juzgados respectivos elevarán con el acta de Visita de Cárcels una relación circunstanciada de todas las causas que tramitan por sus oficinas y otra igual relativa a los penados, ambas con arreglo al formulario que se remitirá por Secretaría.

La relación correspondiente a los procesados deberá ser ordenada por fecha de iniciación de las causas y se remitirá en dos legajos: uno con las causas con presos y otro con las sin presos. En cada legajo se numerarán correlativamente las relaciones que lo integran. Cada uno de los procesos relacionados, deberá llevar el visto bueno del Juez Letrado respectivo.

Cuando en una misma causa haya varios procesados, no deberá hacerse una relación para cada uno de ellos; bastará que todos estén comprendidos en una sola.

A la vez, e independientemente del número de orden que corresponda a cada relación, serán numerados correlativa-



CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XXXVI LEGISLATURA

81.ª SESION ORDINARIA (EXTRAORDINARIA)

NOVIEMBRE 14 DE 1951

PRESIDEN EL DOCTOR ALFEO BRUM
(PRESIDENTE)

Y EL DOCTOR ANTONIO GUSTAVO FUSCO
(PRIMER VICEPRESIDENTE)

SUMARIO

- 1—Asistencia.
- 2—Asuntos entrados.
- 3—Monumento Nacional "Higuerón de los Tretita y Tres".
—Se resuelve que pase la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Gamba, a la Comisión Especial encargada de confeccionar la orden del día.
- 4—Nota de los empleados y obreros de la Empresa de Aguas Corrientes de Montevideo. — Manifestaciones del señor Senador Gamba, anunciando que cuando llegue el proyecto al Senado, solicitará que sus palabras pasen a la Comisión que coordina la orden del día para que ésta lo tenga en cuenta.
—Debate en que intervienen varios señores Senadores.
- 5—Venias de destitución. — Críticas de algunos señores Diputados sobre la forma en que el Senado considera dichas venias.
—Manifestaciones del señor Senador Cusano.
—Debate.
—El señor Senador Forteza solicita autorización para que los miembros de la Comisión de Defensa Nacional puedan retirarse de Sala para proseguir el estudio del proyecto sobre reajuste del Escalafón Militar.
—Se resuelve de conformidad.
—Prosigue el debate.
- 6—El señor Senador Rubio plantea una situación personal.
- 7—Integración de las Juntas Electorales. — El señor Senador Viña pide que se aplaze su consideración.
—Manifestaciones del señor Senador Chiarino.
—Debate.
—Se vota afirmativamente la moción de aplazamiento.
—El señor Chiarino solicita se rectifique la votación.
—Debate. Fundamenta su voto el señor Senador Gallinal.
—Se vota la moción de aplazamiento formulada por el señor Senador Viña.
—Fundamenta su voto el señor Senador Haedo.
- 8—Asuntos entrados.
- 9—Integración del Directorio de las Cajas de Jubilaciones. El señor Senador Viña solicita se declare grave y urgente el asunto y se considere sobre tablas.
—Manifestaciones del señor Senador Zabala Muniz, solicitando a nombre de la Comisión de Asuntos Administrativos, se recabe el dictamen correspondiente del Poder Ejecutivo, de acuerdo por lo establecido en el artículo 185 d la Constitución.
—En señor Senador Viña propone que una vez expedido el Tribunal de Cuentas, se cite extraordinariamente al Senado, para considerar los pedidos de venia para integrar los Directorias de los Entes Autónomos.
- 10—Asuntos entrados.
- 11—Subvención a los centros de asistencia de niños mentalmente anormales. — El señor Senador Chouhy Terra solicita se trate el proyecto de la referencia.
- 12—Integración del Directorio de los Entes Autónomos. —Se aprueba la proposición del señor Senador Zavala Muniz (asunto 9).
- 13—Subvención a los centros de asistencia de niños mentalmente anormales. (Asunto 11).
—El señor Senador Arroyo Torres pide al señor Senador Chouhy Terra, el retiro de la moción que ha formulado.
- 14—Licencia al señor Senador Charlone. — Concedida.
- 15—Asuntos a considerar por el Senado.
—El señor Senador Fernández Crespo propone que se suspendan las sesiones ordinarias que debían realizarse en el mes de diciembre, convocándose a sesiones extraordinarias, después del día 16.
—Observaciones de los señores Senadores Berro y Grauert.
—Se aprueba la proposición del señor Senador Fernández Crespo.
- 16—Moción del señor Senador Berro para que si el Senado quedare sin número, se celebre sesión a la hora 22.
—Se resuelve prorrogar la sesión hasta terminar la discusión del incidente planteado.
—Se aprueba la moción del señor Senador Berro, para que el Senado celebre sesión a las 22 horas para continuar considerando los asuntos de la orden del día.
—Se resuelve prorrogar la sesión.
- 17—Prórroga de los desalojos y lanzamientos. — En primera discusión general y particular. — Aprobado. — Supresión de la segunda discusión. — Sanción. — (Carp. 448/951. — Rep. 191).
Pasa al Poder Ejecutivo.
- 18—Festejos conmemorativos de la Asamblea de la Florida. — Proyecto por el que se destinan recursos para sufragar los gastos que demandaron dichos festejos. — En primera discusión general y particular. — Aprobado. — Supresión de la segunda. — Sanción. — Carp. 411/951. — Rep. 193. M. 2417.
Pasa al Poder Ejecutivo.
- 19—Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. — Proyecto por el que se contribuye con \$ 15.000 para los gastos realizados por dicha sociedad. — En primera discusión general y particular. — Aprobado. — Supresión de la segunda. — Sanción. — Carp. 406/951. — (Rep. 196. — M. 2211).
Pasa al Poder Ejecutivo.
- 20—Aportes jubilatorios. — Exoneración de recargos a los deudores. — Se resuelve aplazar la consideración del asunto para tratarlo en la sesión a realizarse a la hora 22.
- 21—Adquisición de la Biblioteca que perteneciera al señor Alberto Llamas. — En primera discusión general.

(Ocupa la Presidencia el doctor Antonio Gustavo Fusco)

- Observaciones del señor Senador Rubio. — Aclaración del señor Senador Arrillaga Safons. — Se aprueba el proyecto en general y particular. — Se suprime la segunda. — Sanción. — Carp. 2029|950. — Rep. 199. M. 1933.
Pasa a la Cámara de Representantes.
- 22—Adquisición de la Biblioteca del doctor Martínez Vigil. — El señor Senador Haedo propone que se incluya el proyecto de la referencia y se considere en la sesión que realizará el Senado a la hora 22. —Se tendrá presente la solicitud del señor Senador, por la Comisión Especial coordinadora de la orden del día.
- 23—Ley Orgánica de los Ferrocarriles. — El señor Senador Cusano solicita que se trate en la primera sesión extraordinaria que se realice después del 16 de diciembre. —Se tendrá en cuenta del pedido del señor Senador Cusano.
- 24—Comercialización de la cosecha de trigo. — En primera discusión general y particular. — Aprobado. — Supresión de la segunda. — Sanción. — Carp. 427|951. — Rep. 198.
Pasa al Poder Ejecutivo.
- 25—Cédula jubilatoria al personal docente. — En primera discusión general y particular, aprobado. — Supresión de la segunda. — Sanción. — Carp. 2018|950. — Rep. 195. — M. 2172.
Pasa a la Cámara de Representantes.
- 26—Conferencia Interamericana de Abogados. —El señor Senador Zavala Muniz informa a nombre de la Comisión. — Fundamenta su voto la señora Senador Pinto de Vidal. — Manifestaciones del señor Senador Chiarino y de los señores Senadores Zavala Muniz, González Conzi y Gallinal. —Se aprueba la proposición de la Comisión para que se cedan las Salas de las Comisiones. (Carp. 422|951. — Rep. 166. —Se vota negativa la moción de la señora Senador Pinto de Vidal y del señor Senador Chiarino, para que se ceda también la Sala de Sesiones del Senado.
- 27—El señor Senador Grauert solicita que antes de pasar a cuarto intermedio, se consideren los asuntos que figuran con los números 13, 14 y 15. —Se aprueba la moción.
- 33—Fiscalía Letrada de Flores. — El señor Senador Zavala Muniz solicita que se pase a sesión secreta para considerar la venia correspondiente.
- 29—Convención Internacional de Aviación Civil, de Chicago. — En primera discusión general y particular, Aprobado. — Supresión de la segunda. — Sanción. — Carp. 1414|949. — Rep. 200. — M. 1542.
Pasa a la Cámara de Representantes.
- 30—Congreso Latino Americano de Mujeres Médicas. — Proyecto por el que se destinan \$ 10.000.00 para sufragar los gastos que demande su realización. — En primera discusión general. — Manifestaciones del señor Senador Berro. —Se aprueba en general. —En discusión particular. —Manifestaciones de los señores Senadores Echegoyen y señora Pinto de Vidal. —Se aprueba en particular. — Sanción. — Carp. 450|951. — Rep. 194. — M. 2354.
Pasa al Poder Ejecutivo.
- 31—Concurso de huertas familiares. — Proyecto por el que se suministran semillas y asesoramiento técnico gratuito a los participantes. —En primera discusión general y particular. — Aprobado. — Supresión de la segunda. — Sanción. — Carp. 449|951. — Rep. 192. — M. 1810.
Pasa al Poder Ejecutivo.
- 32—Fiscalía Letrada Departamental de Flores. — Pedido de venia del Poder Ejecutivo, para designar al doctor Oscar María Infanzozzi Soba. —El señor Senador Grauert solicita que se levante la sesión. — Consideraciones de los señores Senadores Fernández Crespo y Zavala Muniz. —El Senado pasa a sesión secreta. —En sesión pública. La Mesa da cuenta que no hay número para continuar sesionando. —Se da cuenta de lo actuado en la sesión secreta. —En Senado ha concedido la venia solicitada por el Poder Ejecutivo, para designar Fiscal Letrado Departamental, en el Departamento de Flores, al doctor Oscar María Infanzozzi Soba. — (Carp. 436|951. — Rep. 180). —La solicitud de venia para ascender al grado de Coronel al Teniente Coronel señor Miguel Sánchez Gomeza, vuelve a Comisión. —La solicitud de venia para ascender a Coronel, al Teniente Coronel señor Alfonso Elbio Rocca, queda sin resolución, por falta de número. —Se da por terminado el acto, siendo las 22 horas y 15 minutos.

1

Siendo las 17 horas y 40 minutos entran a Sala los señores Senadores: Amblivia, Arrillaga Safons, Arroyo Torres, Batlle Pacheco, Bayley, Berro, Bove Artcaga, Correa, Cusano, Cutinella, Chiarino, Chouhy Terra, Echegoyen, Espalter, Fernández Crespo, Ferreiro, Forteza, Fusco, Gallinal, González Conzi, Grauert, Haedo, Manini Ríos, Rodríguez Larreta, Rubio, Viña, Vidal (Pinto de), Zavala Muniz, y Gamba.

Con licencia: el señor Charlone.

2

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo número está abierta la sesión.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados. (Se da de los siguientes:)

El Poder Ejecutivo, remite un Mensaje por el que solicita venia para reconocer el derecho que adquirió el Capitán de Fragata (R) don Diego J. Johnson, para ser ascendido al grado de Capitán de Navío, con fecha 1.º de febrero de 1944.

—A la Comisión de Defensa Nacional.

La Cámara de Representantes, remite con sanción un proyecto de ley por el que se autoriza a tomar la suma de \$ 10.000.00, con destino a los gastos que origine la organización del Congreso Uruguayo de Cirugía a realizarse en Montevideo.

—A la Comisión de Presupuesto.

La misma Cámara, comunica la sanción del proyecto de ley por el que se establece que los contribuyentes morosos podrán pagar sin recargos, multas ni intereses, los impuestos que adeudan.

—Archívese.

El Ministerio de Hacienda, acusa recibo de la resolución por la que se dispone la publicación de la ley Constitucional.

—Archívese.

La Sociedad de Fomento Rural de Colonia Agraciada solicita sea declarado Monumento Nacional el "Higuerón de los Treinta y Tres", existente en la Playa de la Agraciada.

—A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Poder Ejecutivo, acusa recibo de las siguientes leyes: por la que se refuerzan varios rubros del Consejo del Niño, —de la que acuerda pensión al señor Heracleo Sena; que declara computables los servicios prestados por los Profesores Honorarios de los Institutos Penales; que declara incluidos en los beneficios establecidos por la ley de 16 de diciembre de 1947, a los ex-Administradores de Rentas; y de la que incorpora a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, el personal de los servicios últimamente nacionalizados.

—Archívese.

El señor Senador Carlos T. Gamba presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara monumento histórico el "Higuerón de los treinta y Tres" existente en la playa de la Agraciada.

(A la Comisión de Constitución y Legislación).

3

(El proyecto de ley y exposición de motivos, son los siguientes:

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General.

DECRETAN

Artículo 1.º Declárase Monumento Nacional al "Higuerón de los Treinta y Tres", existente en la Playa Agraciada.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Carlos T. Gamba

EXPOSICION DE MOTIVOS

Distintas instituciones y personas representativas nacionales, han iniciado un movimiento de opinión en el sentido de lograr que los Poderes Públicos declaren Monumento Nacional al Higuérón de los Treinta y Tres, existente en la Playa Agraciada.

Este árbol histórico, el primero que cobijó a los héroes de la Cruzada Libertadora, merece que el país lo rememore en forma excepcional, por estar vinculado a un hecho de indudable trascendencia histórica.

El proyecto adjunto recoge esta iniciativa, en la seguridad de que el Senado le prestará preferente atención.

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra se va a entrar a la consideración de la orden del día.

SEÑOR GAMBA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMBA. — Deseo referirme, señor Presidente, en primer término a ese proyecto de ley, con exposición de motivos, que acaba de dar cuenta la Mesa en último término.

Ese es un proyecto de homenaje de carácter patriótico, cuyo contenido es de perfecta captación con la simple audición de su lectura.

Se trata como lo dice la lectura que acaba de hacer el señor Secretario, de declarar Monumento Nacional a un árbol que está en un predio de la Playa de la Agraciada, en donde se efectuó, al parecer, según los datos históricos obtenidos, la primera conjunción de hombres de la cruzada del año 25.

Se quiere declarar a ese árbol Monumento Nacional por haber sido testigo del primer momento en que se inicia la campaña de 1825.

No sería esta la primera vez, —porque hay muchos accidentes de la naturaleza dedicados a conmemorar, a perpetuar, la acción de hechos notables con nombres de personas— que se realizan actos de esta naturaleza.

De manera que voy a solicitar para esta cuestión, que no irroga gastos de ninguna especie, que no significa ninguna perturbación, ni altera el funcionamiento normal del Senado, que este asunto se declare grave y urgente y se trate de inmediato.

Vuelvo a repetir, señor Presidente que de lo que se trata es de declarar Monumento Nacional al llamado "Higuérón de los Treinta y Tres" que es, por decirlo así, como una deuda que espiritualmente tiene el país con el sitio en donde está plantado ese árbol memorable.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Pido la palabra.

Consecuente con mi posición inalterable de que todas las preferencias solicitadas por los señores Senadores pasan a la Comisión Especial que el Senado ha designado para confeccionar las órdenes del día, me voy a oponer a la moción del señor Senador Gamba. No me niego a que sus palabras pasen a dicha Comisión, la que, si lo considera oportuno, incluirá ese asunto en el orden del día, tal como lo propone el señor Senador.

SEÑOR GAMBA. — Acepto la proposición del señor Senador de que mis palabras pasen a la Comisión Especial encargada de confeccionar la orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gamba con la modificación propuesta por el señor Senador Arroyo Torres.

(Se vota: Afirmativa).

4

SEÑOR GAMBA. — ¿Me permite, señor Presidente?

Deseo referirme, señor Presidente, a una nota que ha llegado a mis manos, y que supongo habrá llegado a manos de todos los Senadores, de la Federación de Empleados y Obreros de Aguas Corrientes.

Anuncian estos señores, en esta nota, que dirigen a todos los Senadores, la noticia o la información de que en la tarde de hoy, se tratará en la Cámara de Representantes un proyecto de ley relativo al régimen de licencias, y a la concesión de licencias, fundamentalmente, más que al régimen, que está claramente establecido en la ley, pero que no se cumple momentáneamente, hasta se dé una organización definitiva a esa Institución. Hace ya bastantes meses —va a cumplir ahora un año— que estos obreros y empleados de las aguas corrientes solicitan que se les conceda la licencia legal que les corresponde teniendo un enorme recargo en sus funciones.

Diré todas estas cosas, señor Presidente, con mayores detalles y máxima claridad, cuando llegue la oportunidad.

Estas personas solicitan en la nota que si la Cámara de Representantes aprueba ese mensaje, que tiene la seguri-

dad de que ha de ser hoy mismo, por lo que es probable que sea remitido al Senado, este Cuerpo se aboque al estudio de ese asunto, y en la oportunidad en que la Mesa dé cuenta de la recepción de ese proyecto, haré uso nuevamente de la palabra para solicitar que el Senado se aboque de inmediato a su estudio, formulando moción para que mis palabras pasen a la Comisión Especial que confecciona las órdenes del día para que ésta, si lo considera conveniente, lo tenga en cuenta, para ser tratado en estas últimas sesiones, porque no tengo el menor interés en prescindir —además no se podría— del pronunciamiento de dicha Comisión.

Era lo que quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR BERRO. — Pido la palabra.

Simplemente, señor Presidente, para manifestar al señor Senador que esté tranquilo, que si se da cuenta de un proyecto que sea de verdadera urgencia, que viniera hoy de la Cámara de Representantes, la Comisión hará todo lo posible para considerarlo.

SEÑOR BOVE ARTEAGA. — He oído la exposición del señor Senador Gamba y, efectivamente, todos los señores Senadores recibimos un comunicado o boletín, como lo expresaba el señor Senador. Lamentablemente, en uno de sus párrafos hay una redacción que ninguno de los legisladores debíamos aceptar sin un acto de protesta, por lo menos...

SEÑOR FORTEZA. — Apoyado.

SEÑOR BOVE ARTEAGA. — ...frente a una casta amenaza en un servicio público, haciendo una pregunta de si podrá tener el pueblo agua si no concede el Senado la aprobación.

Creo, señor Presidente, que se están desnaturalizando ya los métodos de petición, aunque se tenga toda la razón, como creo que la tienen estos empleados, desde el momento que no se ha cumplido con la ley de licencias a que, desde hace dos años, tiene derecho esos obreros; pero, me parece que es completamente incorrecta, una nota venida en esos términos.

Es a raíz de las palabras del señor Senador Gamba que quiero hacer esta manifestación, que creo debe ser compartida por todo este Senado...

SEÑOR FORTEZA. — Apoyado.

SEÑOR BOVE ARTEAGA. — ...de que no podemos aceptar peticiones bajo amenaza de ninguna forma.

Me parece que sabiéndose que los legisladores tienen mejor intención para solucionar todos estos problemas, se puede redactar una nota en forma correcta y solicitar lo que ellos entienden son sus derechos, en otros términos.

Nada más señor Presidente.

SEÑOR GAMBA. — ¿Me permite, señor Presidente?

Diré que estoy en absoluta conformidad con las palabras pronunciadas por el señor Senador Bove Arteaga; sólo sí, señor Presidente, que mi deseo primario o fundamental era el de prevenir al Senado al efecto de tratar una situación que, verdaderamente, tiene características de anomalía.

SEÑOR ZABALA MUNIZ. — Apoyado.

SEÑOR GAMBA. — Ahora, la forma en que esa nota ha sido presentada, no puede tomarse todavía con una solicitud ejercitando el derecho de petición elevada a la autoridad del Senado.

Esto lo ha considerado como una carta particular a cada uno de nosotros, y tanto es así, que sobre el texto de estos papeles no podría la Mesa poner a consideración el asunto, porque, es más bien una comunicación individual.

A pesar de ello, no he dejado de advertir la injusticia e inoportunidad de las palabras a que se ha referido el señor Senador Bove Arteaga, y el hecho de que anuncie que voy a ocuparme del tema, y posiblemente lo hará todo el Senado, será, pues, la oportunidad de repetir las palabras del señor Senador y otras más que sean necesarias, manifestando que el Senado no está dispuesto a votar leyes ni iniciativas bajo la presión de amenazas.

SEÑOR BAYLEY. — ¿Me permite, señor Presidente?

Creo que se están confundiendo, señor Presidente, dos documentos que se pueden separar, y que son independientes.

La nota en que el Comité pide, individualmente, a cada uno de los Senadores, que se preste preferencia o atención a este asunto, es absolutamente correcta.

SEÑOR BERRO. — Apoyado.

SEÑOR BAYLEY. — Señala simplemente un hecho: esto es, que siendo posible que hoy se sancione en la Cámara de Diputados ese proyecto de ley, solicita que el Senado lo tome en cuenta y lo considere.

Es claro que el Senado lo resolverá en el sentido que crea corresponder.

Lo otro, es un memorándum, en el cual, sin ánimo de

riente ni para el Cuerpo ni para ninguno de sus integrantes, —ni siquiera está dirigido a los señores Senadores, sino a los Representantes,— se señala, con un tono tal vez un poco más allá del control que corresponde, —hecho explicable por las angustias de ese gremio y por lo injusto que ellos al menos consideran esa situación,— la gravedad de la misma.

Se presenta al Estado como descuidando el cumplimiento de las leyes sociales fundamentales; y se pregunta —no hay ninguna amenaza, está entre interrogantes,— si continuando el Parlamento, el Estado, en la desatención o incumplimiento de uno de sus deberes sociales más importantes, podría exigirse que se continúen atendiendo normalmente los servicios del Estado, pero no se anuncia, ni se intimida con una amenaza, con una huelga o con un abandono del servicio público; sino que, en una exposición general, se señala, con un tono patético, quizás un poco excesivo, una situación determinada. El Senado conserva siempre plena libertad ante el problema.

Si el asunto viene, —lo que supondría la aprobación por una de las ramas del Parlamento, desde que está radicado en la otra Cámara,— si el asunto viene, el Senado verá si se trata de una situación justa, o si ese descomedimiento o exageración en los términos, es bastante como para que el Senado se desentienda de dictar una ley que puede ser justa.

Me parece que este asunto no da para más. Hay que quedar a la expectativa. Si la Cámara de Representantes, que ha recibido con dedicación especial ese comunicado, aprueba el Proyecto, ello constituye una fuerte presunción de justicia, y el Senado entrará al examen del proyecto pasándolo a estudio de una Comisión, o lo considerará de inmediato. En todo caso hará lo que le parezca más justo y conforme al interés general y nada más.

SEÑOR ARROYO TORRES. — El párrafo que se ha leído, en mi concepto, no tiene ninguna gravedad. Se quejan de que tienen miles de horas de trabajo de sobre cargo y después, más abajo, dice ese párrafo: "...se tendrá derecho a reclamar de los obreros y empleados de Aguas Corrientes que sigan manteniendo con su exclusivo sacrificio el abastecimiento normal de agua?" Si ese es el párrafo, para mí no tiene ningún sentido grave.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Hay que leer todo el párrafo, que dice: "Si este problema no se nos soluciona en el día de hoy, y se defrauda al personal no votando la solución justa que reclamamos, ¿se tendrá derecho a reclamar a los obreros y empleados de Aguas Corrientes que sigan manteniendo con su exclusivo sacrificio el abastecimiento normal de agua?" De manera que el párrafo, todo unido, encierra, indudablemente, una amenaza.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Es una de las tantas notas que recibimos nosotros casi a diario.

Por otra parte, yo no traje el asunto para que se tratara como grave y urgente.

SEÑOR ARROYO TORRES. — No debemos desesperarnos por tratar el asunto, ni darle más gravedad de la que tiene, ni alarmarnos por la nota de los obreros, que puede ser más o menos correcta.

5

SEÑOR CUSANO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador Cusano.

SEÑOR CUSANO. — Señor Presidente: lo que voy a manifestar ahora lo hago a título puramente personal, pero, sin duda, lo que me provoca esta reacción es la circunstancia de ser integrante de este Cuerpo. No es una cuestión directa, sino, más bien una reacción o defensa que, en este momento, voy a intentar como Senador.

Revisando el Boletín, la publicación informativa de la Cámara de Representantes, al discutirse la Ley Orgánica de los Ferrocarriles, en la cual está incluido en artículo 20 que establece la movilidad y amovilidad de los funcionarios, algunos señores Diputados emitieron juicios realmente ligeros y arbitrarios sobre actitudes del Senado, que no puedo dejar pasar en silencio, fundamentalmente, señor Presidente, de parte de una persona generalmente serena en su juicio, como es el Diputado señor Batlle Pacheco.

Cuando se refirió a la forma en que el Senado procedía a estudiar las venias para las destituciones solicitadas por el Poder Ejecutivo, dijo cosas sorprendentes que necesariamente tienen que ser sorprendentes para todos los Senadores pero, particularmente, para los Senadores que integran la Comisión de Asuntos Administrativos, que saben en la forma serena, en la forma ecuaníme y en la for-

ma estricta en que se estudian allí esas venias para destituir.

Creo que estos asuntos aparentemente nimios, no lo son en realidad.

SEÑOR VISA. — Habría que preguntarle cómo se ha informado, porque son sesiones secretas.

SEÑOR CUSANO. — No se refiere a la discusión sino al resultado de esas sesiones a sus resoluciones.

Recuerdo que días pasados, muy oportunamente, al tratarse el proyecto de reforma constitucional, Martín C. Martínez refiriéndose a los asuntos que se trataban prolija y cuidadosamente en el Consejo de Estado anterior, asuntos aparentemente mínimos, cual podía ser la situación de un portero, de un modestísimo funcionario, en tanto las leyes de jerarquía no se estudiaban tanto, decía que el doctor Martín C. Martínez —creo que con gran razón— manifestaba: esas leyes importantes vienen con todos los informes técnicos, estudiadas prolijamente; cuando llegan a los jefes de la Administración pueden ser votadas con toda comodidad porque no hay ningún peligro, ningún riesgo de equivocarse en lo sustancial. Pero, en cambio, cuando se trata de estudiar la situación de un modesto funcionario, muchas veces víctima de persecuciones equivocaciones o errores de los jefes, cuando está esa situación modestísima de ese funcionario y de su familia en juego y su destino, no se trata de un pequeño asunto sino que por la entidad humana del problema bien merece toda la atención que le presta, en ese caso, que le presta, el Consejo de Estado.

Digo, en esta situación similar en que el Senado emplea en discutir la situación de esos modestos funcionarios, cuyo destino y el de sus familiares tiene en sus manos, no son horas perdidas, y que se ha juzgado muy ligeramente la conducta del Senado, cuando se han expresado cosas como éstas por boca del señor Diputado Batlle Pacheco: "El Senado, donde se tratan en sesiones secretas los pedidos de destitución de empleados inamovibles lo que es un absurdo, ha dejado que permanezcan en sus cargos funcionarios que han cometido hechos escandalosos. Esa es una realidad que todo el mundo conoce".

Y agrega: "Yo admitiría que el Senado fuera un Juez, pero que fuera un Juez en público: que los señores Senadores tuvieran que explicar por qué, a quienes proceden desconociendo en toda forma la honradez de la Administración, cuando consideran esto, valiéndose del secreto, en más de un caso, les permiten que permanezcan en sus puestos".

Y agrega, todavía: "Yo acepto que se exijan garantías, pero que este tipo de funcionarios sea juzgado en sesión secreta del Senado me parece un absurdo. Yo creo que el que tiene culpas debe dar cuenta de ellas públicamente y no es posible que se vaya a entregar el juicio de un mal funcionario, —cuando otros funcionarios están contestes en que es un mal funcionario— a una sesión secreta de un Senado en que, sabiendo que ningún Senador de los que ha votado en contra puede levantar su voz porque tiene que respetar el secreto, las cosas más atroces son respetadas allí, como si merecieran ser respetadas. Bastaría ver algunos procesos de funcionarios escandalosos, y que, sin embargo todavía están en sus cargos".

Parecería, a través de esta acusación, que se ha formado aquí, en el Senado, una mayoría sistemática, defensora de los funcionarios delincuentes, omisos e ineptos. Bien saben los señores Senadores que no es así y que esto es profundamente injusto. Si hay una labor sacrificada, es la de la Comisión de Asuntos Administrativos, que lleva todas las de perder, porque cuando tiene que juzgar y condenar, se conquista la malquerencia de los funcionarios condenados, y cuando defiende situaciones que conceptúa defendibles, se lleva la crítica, enconada e injusta, hasta de los propios legisladores, que creen que ha procedido mal.

Hace nueve años que integro la Comisión —creo que con el señor Senador Zavala Muñoz tenemos el decanato de esa Comisión— y hemos juzgado y hemos tenido a nuestra vista casos tremendos que no los puedo ahora comentar, en la mayoría gente humilde, pero a veces llegaron funcionarios importantes. En una oportunidad, lo recordará el señor Senador Zavala Muñoz, familiares de un alto jerarca de la administración nos vinieron a decir que si nosotros lo condenábamos, ese hombre atentaría contra su vida. Nosotros lo condenamos porque le juzgamos culpable y efectivamente, ese hombre atentó contra su vida: se suicidó.

Otros jefes importantes de la administración llegaron hasta aquí utilizando defensas e influencias de toda especie y, sin embargo, cuando tuvimos la convicción de la culpa, esos jefes enjuiciados cayeron sin que nos detuviera ningún obstáculo ni consideración para cumplir nuestro penoso deber.

Otra de las cosas que reivindicó para la Comisión, y aún para el Senado, es que jamás se ha enterado de la filiación política de los funcionarios a quienes juzgamos. Estoy seguro, porque se han dado casos extraordinarios en que, muchas veces, Senadores de mi filiación defendían a hombres del sector batllista y viceversa, pero nunca tuvimos en cuenta para nada la filiación política para condenar o defender a un funcionario.

Como lo saben bien los señores Senadores, nosotros hemos tenido en cuenta otras razones: expedientes muchas veces incompletos, faltas leves, culpas primarias, etc. Se habla aquí de un funcionario que, en estado de ebriedad, habría provocado tales o cuales accidentes. No recuerdo los detalles, hace mucho tiempo del caso, pero lo que no se sabe es que después nos vinieron los certificados médicos que establecían que ese funcionario se encontraba curado totalmente de su vicio.

Sigue el proceso el vاپuleo en la Cámara de Representantes. Se adhiere, también, a esta misma tesis, según la versión taquigráfica, otro Diputado, un joven Diputado, de gran talento, que me extraña que formule cargos tan ligeros, el señor Diputado Washington Beltrán, que dice en uno de sus párrafos: "Yo no he sido Senador y las venias son secretas, pero puedo señalar, a pesar de ello, que me consta que ha habido múltiples casos de funcionarios con gravísimas irregularidades, o funcionarios totalmente ineptos, o funcionarios omisos en sus cargos, que quedan después, en el secreto del Senado — que no los trata o que los trata y nadie conoce la decisión ni los motivos que las inspiran —, que quedan después absolutamente librados de pena y de culpa".

El señor Diputado demuestra aquí, que ignora las disposiciones estrictas de la Constitución, porque si no trata el Senado las solicitudes de venia dentro de los tres meses, quedan automáticamente concedidas, y es esta una de las fórmulas que tiene el Senado, muchas veces, para concederlas, precisamente, no tratando las venias para que a los tres meses el término perezca y quede automáticamente destituido el funcionario.

Creo que todas estas críticas son profundamente injustas, y que se desprestigiaria el Senado si nosotros no pronunciáramos esta palabra de protesta ante la injusticia, lamentando y extrañándonos de que hombres de juicio sereno, hayan emitido, con desconocimiento total de la materia, opiniones tan extremadamente severas e injustas sobre la actitud del Senado.

SEÑOR GAMBA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador Gamba.

SEÑOR GAMBA. — Ya también, señor Presidente, estoy enterado del texto que aparece en las páginas del diario de sesiones de la Cámara de Representantes, a que ha dado lectura el señor Senador Cusano, y no he podido menos que sentirme profundamente afectado. No podría argumentar en mi favor poseer el decanato en la formación de la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, como ocurre con los señores Senadores Cusano y Zavala Muniz, pero me ha bastado el tiempo que formo parte de esa Comisión, en la cual también he estado en otras oportunidades en que he integrado transitoriamente este Cuerpo, y puedo manifestar que ni he formado parte de ninguna mayoría predispuesta de antemano para salvar a nadie, aún pasando sobre los más reprobables actos delictuosos, ni tampoco para condenar en una forma tal, como allí se expresa.

Siempre he emitido mis votos y mis opiniones libremente, y algunas veces he formado parte de la mayoría de la Comisión y otras veces no, he estado en minoría, pero siempre ajustándome libérrimamente a mi criterio, al resultado del estudio del expediente que se nos ha presentado.

Supongo, señor Presidente, dado los elogios que el señor Senador Cusano ha hecho de las personas que aparecen manifestándose en esa forma, — y son de nuestro conocimiento y del conocimiento de todo el Senado —, que ellos deben haber tenido alguna información errónea.

Nosotros hemos estudiado el proceso administrativo y, si lo consideramos correcto, ajustado en un todo a las disposiciones legales pertinentes, hemos emitido, libremente, nuestro voto. Si alguna vez hemos rechazado alguna venia que tal vez mereciera ser concedida, haciéndonos solidarios de la sanción que el Poder Ejecutivo reclamaba para el delincente, fué, señor Presidente, porque el sumario administrativo que llegó a nuestras manos era imperfecto, ya que no se habían cumplido casi ninguno de los requisitos que la ley exige, en tal forma que el presunto delincente aparecía falto, en absoluto, de garantías. En estos casos, hemos negado la venia, a veces para devolver el sumario al Poder Ejecutivo, para que se vistiera en forma más completa, y otras veces negamos la venia porque no pudimos formar juicio sobre la intención que perseguía el Poder Ejecutivo. Pero todo ello, señor Presidente, no ha sido jamás el arreglo de tres o cuatro miembros de esta Comisión para formar una mayoría determinada con el fin de proceder en tal o cual forma atentatoria.

Me he sentido y me siento muy bien en compañía de los distinguidos compañeros del Senado que no pertenecen a mi Partido y, desde luego, con aquellos que forman parte del Partido en que milito.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Creo que este asunto no tiene ninguna importancia, señor Presidente.

SEÑOR CUSANO. — ¡Cómo no, señor Senador! Tiene mucha importancia.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Permítame, señor Senador. No se apure; yo le he escuchado, y deseo que el señor Senador me escuche.

Esto es lo que acontece todos los días con la Cámara de Representantes, y es, por otra parte, la carga que llevamos los que ocupamos una posición pública.

Una de las cargas inherentes a la función pública es, precisamente, que estamos sometidos a las críticas de nuestros conciudadanos. Por cierto, a mí no me han tratado muy bien en la Cámara de Representantes, en alguna oportunidad; mucho más de como ha tratado el señor Diputado Batlle Pacheco al Senado.

SEÑOR CUSANO. — Pere cuando el señor Senador era Ministro.

SEÑOR ARROYO TORRES. — No, señor Senador. Lea el señor Senador el informativo de la Cámara de Representantes, y advertirá que mucho más injusto que con el Senado fué conmigo, con nombre propio, con motivo de la consideración de la ley de medicamentos, en cuya ocasión me dijeron bastantes injusticias. No obstante, yo no he reaccionado ante esas manifestaciones, ya que no había injuria personal — y si hubiera existido se habría arreglado de otra manera — y, no habiéndola, considero que los señores Representantes tienen el derecho de decir lo que se les antoja.

SEÑOR GAMBA. — No, señor Senador; los señores Diputados no tienen el derecho de decir lo que se les antoja.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Mientras no haya injuria personal, en cuyo caso habría que arreglar las cosas por otro camino.

Yo no puedo limitar a ningún Representante el derecho de juzgar mi conducta, pues entiendo que pueden hacerlo como les parezca, con la mayor libertad, si se considera que mi conducta no ha sido completamente correcta o que yo, por equivocación, he realizado algún acto irregular o incorrecto. De manera, pues, que acepto que la Cámara de Representantes juzgue mi conducta como los señores Diputados crean conveniente hacerlo. El problema es cuando hay injuria personal, que tampoco se arregla con discursos en el Senado.

Pero en este problema del Senado, señor Presidente, yo no hago cargos a la Comisión de Asuntos Administrativos; no voy a dar ninguna batalla en esta materia. Pero hay un hecho cierto, señor Presidente, que el Senado debe reconocer: que a mí no me van a hablar de la política general seguida por el Senado en esta materia, porque de cuarenta venias que el Senado ha negado, he sostenido, en 38, arduas batallas, durante horas, para que se concedieran.

SEÑOR GONZALEZ CONZIL. — Apoyado.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Si yo he luchado, en 38 oportunidades, para que el Senado concediera otras tantas venias que luego negó, tengo el derecho de creer que el Senado se equivocó en 38 oportunidades. Respecto la actitud de los demás señores Senadores; pero el Senado sabe bien que posiblemente en el 99 o/o de las venias que se negaron, he sostenido que debían concederse.

Muchas veces he explicado en Comisión que, en virtud de mi actuación en las esferas judiciales, tengo un criterio distinto al que pueden tener los señores Senadores.

SEÑOR VISA. — El señor Senador está violando el secreto.

SEÑOR ARROYO TORRES. — No, señor Senador.

Decía, señor Presidente, que en razón de mi actuación judicial, de haber actuado durante tantos años en la justicia, tengo un criterio distinto acerca del concepto del buen padre de familia que tienen los señores Senadores.

Los señores Senadores se referían, en muchos casos, a la situación de hambre, de miseria, a que quedaba sometido el funcionario si se procedía a su destitución, por lo que en algunas oportunidades se negó la venia para no quitarle el derecho a la jubilación. Tanto es así señor Presidente, que en el Senado, advirtiéndose que venias que deben concederse se negaban por no quitar al funcionario el derecho a la jubilación, se planteó la necesidad de modificar la ley de jubilaciones, para que se pudieran conceder esas venias. Repito que ha habido casos en que una circunstancia determinaba la conducta, la decisión, de los señores Senadores.

De este episodio, señor Presidente, deseo sacar hechos concretos y exactos. Creo que el Senado no tiene el derecho de usar el secreto para dar o negar las venias, porque nadie puede ser condenado en secreto. Nosotros hemos prohibido los procesos secretos, en tanto que el Senado, lo mantiene, para considerar las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para destituir a los funcionarios. No se trata de una prescripción constitucional, sino de una prescripción reglamentaria.

SEÑOR VISA. — Pero hasta que no la levante el Senado, hay que cumplirla; habría que proponer, entonces, su derogación.

SEÑOR ARROYO TORRES. — A eso voy, señor Senador.

Desde que dice que el Senado niega las venias sin razón y que procede a corazón ligero, para terminar con estos debates en el porvenir, y se sepa lo que ocurre —si es el Poder Ejecutivo el que envía los expedientes mal informados o si es el Senado el que no quiere ver los casos de ineptitud, omisión o delito— habría que derogar esa disposición reglamentaria.

Propongo, en consecuencia, que mis palabras pasen a la Comisión de Reglamento para que se estudie la posibilidad de levantar el secreto de estas sesiones. Sesionando públicamente se sabrá cómo procede el Senado.

Entiendo que esta es la única manera de clarificar el problema.

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase el artículo pertinente. (Se lee:)

"Artículo 229. En los casos que por prescripción constitucional o disposición de la ley, haya el Senado de conceder venia o prestar su acuerdo para la provisión de empleos públicos, lo hará en sesión secreta".

SEÑOR ARROYO TORRES. — ¿Pero dónde está la disposición constitucional, legal o reglamentaria que obliga al secreto? El Senado adopta esa actitud por comodidad.

Entiendo, señor Presidente, que habría que levantar el secreto y tratar estos asuntos en sesión pública. Es la única manera de terminar con estas discusiones.

Si el Poder Ejecutivo envía mal informados los expedientes, que se diga en el Senado, para que la opinión pública juzgue a un Poder Ejecutivo que así procede; si es el Senado el que procede a corazón ligero, que la opinión pública lo sepa.

En esa forma, señor Presidente, no habrá conflictos ni con la Cámara de Representantes ni con ningún ciudadano.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Las palabras que acaba de pronunciar el señor Arroyo Torres casi hacen inútiles las mías, porque yo quería señalar —si no entendí mal la lectura que hizo el señor Senador Cusano— que no está en tela de juicio la conducta de la Comisión de Asuntos Administrativos, que tengo el honor de presidir. Si eso fuera lo que estuviera en tela de juicio, no tendría ningún inconveniente en decir qué pienso de esa Comisión y cómo actúa; pero las palabras de los señores Diputados que se han leído, son de tal vaguedad, que no se puede reaccionar contra ellas; primero, porque la materia de que se trata es una materia secreta del Senado. No me creo obligado a absolver posiciones sobre cargos de esta naturaleza. No tengo por qué decir si he sido mayoría o minoría en las venias que se han votado o en las que se han dejado de votar. Si se nos hiciera cargos concretos a Senadores, o sobre venias concretas, entonces contestaría. Lo que puedo asegurar, como Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, señor Presidente, es la total buena fe con que todos los integrantes de la misma han juzgado siempre los expedientes, sin otras consideraciones que las que nos imponen los deberes constitucionales.

SEÑOR CUSANO. — ¿Me permite, señor Presidente?

El señor Senador Arroyo Torres planteó otro problema: el problema de futuro; la forma que en el futuro se pueden tratar las venias de destitución por el Senado. Efectivamente, el artículo 96 de la Constitución es el que le concede derecho al Senado a estudiar las venias en sesión secreta; pero no le ordena, en una forma imperativa a que así lo haga. El Senado ha procedido dentro de las atribuciones que le concede el artículo 96 de la Constitución, extendiendo al estudio de las venias de destitución el secreto de las sesiones. Pero es otro problema.

Lo que no acepto es lo que dijo el señor Senador Arroyo Torres en sus primeras palabras: que este asunto no tiene entidad. Tiene entidad; tiene una gran entidad, porque se trata de juicios de Representantes de jerarquía, de legisladores prestigiosos, sobre actitudes de todo el

Cuerpo, sobre actitudes del Senado, no de la Comisión de Asuntos Administrativos aunque esta Comisión es la natural asesora de esta clase de asuntos en el Senado. De manera que le tocaría la parte principal; pero a quien se juzga es al Senado en su totalidad, ya no es el juicio personal de un Diputado sobre determinado Senador que tenga que reaccionar en tal o cual forma, como decía el señor Senador Arroyo Torres, sino que es el juicio de un señor Diputado sobre el Senado y un juicio del cual deriva desprestigio para el Senado porque si fuera cierto que en este Cuerpo sistemáticamente se ampara, por sentimentalismo, por aparcería o por cualquier otro motivo, a funcionarios escandalosos, omisos, ineptos o delincuentes se habría formado en una de las instituciones más importantes del Estado, una especie de refugio, de amparo para la delincuencia y la ineptitud de los funcionarios, y eso no es verdad.

Lamentablemente, en este caso, no puedo mencionar situaciones y circunstancias porque el secreto de las sesiones en que se actúa me lo impide; pero si pudiéramos hablar claro y decir todo lo que tenemos que decir, veríamos que hay una extrema ligereza en esos juicios sobre las actitudes del Senado, que, en sustancia, derivan en el propio desprestigio del Senado, y creo que todos, señor Presidente, tanto nosotros los Senadores —yo en este caso me siento vinculado y agravado por estos juicios— como los propios Representantes, hacen muy mal en establecer esos juicios porque no tienen una prueba concreta de sus dichos y si los llamáramos a probar cuáles son esos centenares y centenares de casos que aquí se ha amparado a los funcionarios escandalosos, se encontrarían con que en ninguno de ellos se ha procedido así.

No sé de donde viene la información; no quiero presumir de dónde viene, pero podríamos decir nosotros que muchas veces hemos tenido en nuestras manos expedientes irregulares, expedientes carentes del material fundamental necesario para poder condenar con juicio y con razón, dentro de la ley, a los funcionarios, que en esos expedientes, muchas veces había opiniones de jerarcas asesores extremadamente severos con los humildes y sobradamente sumisos con los poderosos. Posiblemente sean ellos, en ese caso, los malos informantes de los Diputados.

De todas maneras, quiero decir que esto no es un pequeño asunto, no es una minucia, porque todo lo que deriva desprestigio sobre las instituciones parlamentarias, es un asunto que puede y debe provocar la reacción de sus integrantes.

SEÑOR GAMBA. — ¿Me permite, señor Presidente?

No hay duda, señor Presidente, en las actuaciones...

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — ¿Me permite, señor Presidente, para una cuestión de orden?

¿El orden para hablar los oradores no tiene relación con el uso de la palabra que han hecho antes los mismos?

SEÑOR PRESIDENTE. — En la hora previa, nó, señor Senador.

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — Así que sobre un mismo asunto un orador puede hablar varias veces mientras el otro que no ha hablado, espera.

SEÑOR PRESIDENTE. — Solo que solicitaran la palabra al mismo tiempo.

SEÑOR RUBIO. — ¿Me permite, señor Presidente, para otra cuestión de orden?

Señor Presidente: me veo en la necesidad de plantear una cuestión de orden personal al Senado que no sé si es o no oportuna; pero desearía que una vez terminado con este asunto, se prorrogara la hora reglamentaria por dos minutos, nada más, para expresar mi pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. — Hay que declararlo grave y urgente.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Puede hacerlo en cualquier momento.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador Gamba.

SEÑOR GAMBA. — Señor Presidente: las actuaciones secretas de cualquier instituto, y fundamentalmente las del Parlamento, siempre han dado motivo a cavilidades y a juicios realmente erróneos. Sin duda alguna los escrúpulos que yo he sentido y hasta siento en este momento por esa situación de secreto en que se tratan aquellos expedientes administrativos para los cuales se solicita la venia para destituir a funcionarios, me producen una verdadera incomodidad moral. Por eso, desde el primer día en que entré a formar parte de la Comisión de Asuntos Administrativos, pregunté a los compañeros de la misma quién le impone al Senado el secreto de esa actuación, el secreto de esa sesión en la cual se concede o se niega la venia para destituir. Pregunté si la Constitución tenía algún artículo o alguna disposición que así lo ordenara y se me dijo que no. ¿De dónde resulta, entonces, el secreto

de la actuación? Del Reglamento interno del Senado. Eso es lo que se me ha contestado concretamente y siendo así, y a la espera de una modificación del artículo pertinente de ese Reglamento, que se haría en la oportunidad propicia, hemos llegado hasta hoy. Desearía saber, señor Presidente, porque es oportuno, cual es ese artículo del Reglamento que establece el secreto de esas actuaciones, porque si no existe y no está en la Constitución y no está en el Reglamento interno ni lo establece ninguna disposición expresa de este Cuerpo, la verdad es que desde hoy en adelante, podríamos resolver esas situaciones como se resuelven todas las demás.

Nada más señor Presidente.

SEÑOR GONZALEZ CONZIL. — Señor Presidente: de acuerdo con la lectura que ha hecho el señor Senador Casano, de unas palabras vertidas en la Cámara de Diputados, resulta que la acusación es directamente contra el Senado y no contra la Comisión de Asuntos Administrativos. Siendo tan claro el texto de lo que se dijo no me explico por qué el señor Senador realizó la defensa de la Comisión de Asuntos Administrativos que, a nuestro juicio no tiene nada que ver en este asunto, pues no ha sido acusada.

Yo, señor Presidente, por espíritu de Cuerpo, tal vez debería inclinarse a apoyar las expresiones del señor Senador Casano en la defensa que ha hecho del Senado; pero por encima del espíritu de Cuerpo, hay principios que son fundamentales como la buena marcha del propio Estado, de su organización, que, a mi juicio, puede verse perjudicada por resoluciones equivocadas o muy benignas del Senado.

Antes de entrar al Senado me había formado un juicio parecido al que emití en la Cámara de Representantes el señor Diputado Batlle Pacheco. Parecido, digo, aunque no participo de todos los términos que ha empleado y lo cierto es que luego de haber actuado en la Comisión Permanente ese juicio se fortaleció e incorporado al Senado y luego de haber visto por los corredores de nuestra Casa a las personas para quienes se solicitaba la destitución, hablar con cada uno de los Senadores —yo declaro que siempre he rechazado hacerlo...

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — ¿Me permite, señor Senador?

Me atrevo a decirle que no las ha visto hablar con cada Senador porque, como miembro de la Comisión de Asuntos Administrativos, me he negado, absoluta y terminantemente, a hablar con cualquier funcionario cuya venia de destitución haya sido solicitada por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR GAMBA. — Por mi parte, declaro que nunca he hablado con ningún funcionario por semejante causa.

SEÑOR GONZALEZ CONZIL. — He visto, señor Presidente, en los corredores del Senado a personas inculadas hablar con Senadores. En ese sentido rectifico mi primera afirmación: pero cuando me han querido hablar a mí, siempre les he dicho: Voy a proceder como Juez; así que no deseo conversar con usted. Me voy a formar juicio, leyendo el expediente, que es lo que he hecho siempre.

De todo esto, señor Presidente, puedo afirmar que aquel primitivo juicio acerca de la benignidad del Senado en materia de venias —y con perjuicio de los buenos funcionarios— se ha confirmado y lo he confirmado luego de participar en distintos pedidos de venia del Poder Ejecutivo.

Creo, señor Presidente, que se ha perdido un poco el sentido de las cosas.

En otras épocas, el Estado en este país, fué victimario de los funcionarios; pero hoy, a mi juicio, el Estado es la víctima de muchos malos funcionarios. Por eso siempre he considerado que el Poder Ejecutivo más bien ha sido remiso en cuanto a la solicitud de venias para destituciones.

En la administración pública, los funcionarios tienen muchos derechos lo que miramos con simpatía; pero, a nuestro juicio, se entiende por parte de algunos que existe un derecho superior que es el de faltar a su deber. Es una circunstancia conocida, que se ha divulgado entre los mismos componentes de la administración pública y que repudían los buenos funcionarios.

Resulta ahora, que hay un problema fundamental de procedimiento que debemos resolver: es el que se refiere al secreto con que el Senado trata las venias. Parece que no hay disposición constitucional, ni legal, ni reglamentaria que establezca ese secreto, de manera que resulta inexplicable la práctica seguida hasta ahora por el Senado.

En los casos concretos en que se presenten a nuestra consideración venias de destitución, formularé moción para que se traten en sesión pública. Creo que esto es saludable. Como decía el señor Senador Arroyo Torres, no puede, en

la etapa definitiva de un juicio iniciado en la administración pública, resolverse la cuestión en forma secreta, violándose así principios fundamentales.

Se ha hablado del prestigio del Senado. Lesionado estaría porque se ha hecho críticas a su actuación. No creo que las críticas a un organismo redunden en perjuicio del mismo, si dentro de ese organismo existe el propósito de enmendar los errores. Sería el Cuerpo Legislativo, de aceptar esa teoría, organismo de desprestigio de los demás poderes, entre ellos el Poder Ejecutivo, cuya crítica suele hacerse dentro del Parlamento, no con la intención de desprestigiarlo, sino con el propósito de que enmiende actitudes equivocadas.

Creo que el Diputado aludido no ha tenido la intención de desprestigiar al Senado y posiblemente su intención haya sido la de prestigiarlo, reconociendo que, de acuerdo con su concepto, la conducta del Senado es equivocada, y espera que la rectifique.

Es lo que tenía que decir.

SEÑOR BATLLE PACHECO. — ¿Me permite, señor Presidente?

Entiendo que las críticas que se dirigen al Senado por su actuación en las venias de destitución, son justas.

No voy a recoger las palabras pronunciadas en la Cámara de Representantes, porque en ellas, pudo haber exceso. Pero a mi juicio el Senado ha sido siempre un tribunal excesivamente clemente. Naturalmente, todos los sentimientos inclinados a la clemencia, hasta el punto, que bajo la Constitución del año 30, el Senado no tenía plazo para expedirse sobre las venias, y, entonces, las venias de destitución se acumulaban durante años, sin que nadie promoviera su resolución.

La primera limitación que se hizo al régimen de las venias a otorgarse por el Senado, fué el establecimiento de un plazo de 90 días para expedirse, lo que constituyó, de hecho, el reconocimiento de que el régimen anterior era inconveniente.

Posteriormente, nuestra actitud, no ha sido la de otorgar las venias siempre que hubiera razón para ello, sin que, por el contrario, hemos actuado, a mi juicio, en forma demasiado clemente. Esto lo he hecho notar en algunas sesiones. Entiendo que tiene el inconveniente de crear en la administración pública cierta desmoralización, porque los funcionarios correctos y los incorrectos se consideraban casi igualmente garantidos.

Debemos reconocer, señor Presidente, que hemos actuado en falta, porque si el Reglamento no nos impone el secreto de las sesiones, para actuar en esa forma, se necesita una resolución expresa del Senado en cada caso, y nosotros hemos realizado sesiones secretas no que se ajustan a lo establecido en el Reglamento. Hemos empleado un procedimiento que es más cómodo, porque en una sesión secreta, se puede discutir con más libertad y aún podemos sentirnos inclinados a la clemencia, también con más libertad.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — O a la crueldad!

SEÑOR FORTEZA. — ¿Me permite, señor Presidente, para una cuestión de orden?

Lamento interrumpir al señor Senador, pero deseo solicitar autorización en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, para continuar considerando en dicha Comisión, el proyecto sobre escalafón militar, cuyo estudio está por terminarse a efectos de poder traerlo al Senado dentro de un tiempo prudencial, y declarando, que, en caso eventual de quedarse este Cuerpo sin número, los miembros de la Comisión, estarán a su disposición.

SEÑOR CHIARINO. — Pido la palabra.

Desde luego, señor Presidente, me encuentro inclinado a acceder a la solicitud que formula el señor Senador; pero deseo llamarle la atención sobre un punto concreto, solicitado de la amabilidad del señor Senador postergara el planteamiento que ha hecho por unos instantes. El punto concreto, es el siguiente: el primer tema que figura en el orden del día se relaciona con el proyecto que he presentado sobre integración de las Juntas Electorales, lo que necesita quórum especial, y temo que si no tenemos los votos suficientes, resultará vana nuestra deliberación e inconducente la ausencia de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional.

Formulo este pedido porque no creo que demore mucho esta incidencia.

SEÑOR FORTEZA. — En el momento de la votación, podremos hacerlo en Sala, para votar el proyecto a que alude el señor Senador, en el sentido que nuestras respectivas bancadas hayan resuelto.

SEÑOR CHIARINO. — Yo lo había dicho repito, es entendido de que esta incidencia terminaría brevemente, porque creo que ha insuñido bastante tiempo.

SEÑOR FORTEZA. — Entonces modifico la moción en

SEÑOR CHIARINO. — El planteamiento del problema, lo ha hecho, con una claridad meridiana que debemos reconocer, y elogiar, y que yo elogio, el señor Senador Viña.

SEÑOR BAYLEY. — Le ruego al señor Senador Chiarino, que no me ayude a expresar mi pensamiento, y que me deje exponer mi punto de vista, como el señor Senador Viña ha expuesto el suyo.

SEÑOR CHIARINO. — Y el de su sector.

SEÑOR BAYLEY. — Y el de su sector.

Como nosotros nos movemos en la realidad, y el señor Senador Viña habló en nombre del Partido Nacional, aparece ya como prácticamente imposible dar andamio constitucional adecuado e inmediato a esta modificación sustancial a la legislación vigente en la materia electoral.

Considero, que la moción de aplazamiento tiene hasta un fondo de relativa cortesía, para no exponer una iniciativa que no ha sido debidamente estudiada, que carece de informe de la Comisión respectiva, que puede, en sus lineamientos generales ser muy plausible como tendencia orgánica o permanente para reestructurar los servicios que prestan las Juntas Electorales. Así no se la condena al fracaso, definiéndola irremisiblemente. Podrá considerarse más adelante, con las necesarias disponibilidades de tiempo, desconectando el estudio de toda preocupación política.

SEÑOR MANINI RIOS. — ¿Por qué no resistieron eso en la elección del 42?

SEÑOR BAYLEY. — Las leyes electorales no se hacen para una elección determinada, ni para un plebiscito determinado. Las leyes electorales forman parte de un sistema de legislación con vista a todos los procesos electorales, y salvo cuando alguna especialidad muy singular de un acto electoral justifica la introducción de una enmienda, puede hacerse esto; pero no es discreto, ni regular, que se haga en 12 de noviembre, cuando dentro de 10 días deben estar constituidas las mesas de las Juntas Electorales.

SEÑOR MANINI RIOS. — El señor Senador Bayley decía, con mucho acierto, que había que referirse a las realidades, a los hechos. El hecho político es nuevo y único: es el de que hay un plebiscito en el cual tomaron posición los partidos políticos en tal forma, que la gran mayoría de las Juntas Electorales sólo están integradas por partidarios del voto por "sí", y no hay partidarios en las Juntas, del voto por "no".

SEÑOR BAYLEY. — Esas Juntas Electorales —le pregunto al señor Senador para que siga en el uso de la interrupción—, ¿se constituyen después de votado el proyecto de reforma?

SEÑOR MANINI RIOS. — Como las Juntas Electorales tienen por misión asegurar la justicia, diré, el acto pre-electoral, y durante las elecciones, interesa a la democracia de nuestro país, que las Juntas Electorales estén integradas por representantes del voto por "sí" y, que estén integradas, también, con representantes de la otra tendencia. Eso interesa a la verdad democrática en nuestro país.

Por otra parte, este proyecto de ley tiene un antecedente categórico que ha sido recordado ya varias veces en Sala por el señor Senador Chiarino. En 1942, eran otras circunstancias, no creo que fueran de carácter más grave, porque, en esas elecciones había lucha de diversos partidos representados en las Juntas Electorales, representados en las Juntas, en situación de oposición unos con otros. Sin embargo, e integraron las Juntas Electorales, creo que con acierto, con representantes de los partidos que volvían de la abstención. Me parece que se hizo muy bien en proceder así.

Este es un hecho distinto; lo que es igual, es la base política y semejante en el procedimiento que se hizo para corregir una anomalía; la anomalía no surge de la preexistencia de las Juntas Electorales ni del proyecto de reforma constitucional, la anomalía surge, primero, de determinados partidos que forman, por las elecciones anteriores, las Juntas, que yo creo que puedo decir sin equivocarme, que incluso sería otra la disposición de esas Juntas, si determinado sector político que llevó 121.000 votos a las urnas, hubiera tenido ocasión de pronunciarse sobre este problema antes de las elecciones. Habría seguramente miembros de Juntas que serían partidarios del voto por "no". Pero no es este problema que interesa; interesa que hay una realidad, y sobre todo convendría a los partidos de la mayoría, que creen estar respaldados por esa gran masa de pueblo, que no se pudiera hacer ninguna objeción al plebiscito. Parece absurdo que quienes son más interesados en prestigiar este plebiscito, no abran las puertas o caminos, se adelantan ellos, mismos, para que la oposición, tan menuda y tan pobre como las de estos cuatro Senadores en treinta y uno, tenga el deber de reconocer que las cosas se hicieron todas perfectamente bien, y que la mayoría se adelantó a facilitar el camino. No entiendo, políticamente, el error que están cometiendo las mayorías.

SEÑOR BAYLEY. — El señor Senador Manini Ríos en uso de una interrupción ha demostrado que, si hubiéramos entrado al fondo del asunto, desconectándolo de una realidad política, circunstancial, podríamos muchos haber encontrado plausible la orientación que tiende a dar representación al mayor número de opinión dentro de las Juntas Electorales. Pero yo he declarado, a nombre personal, que con esto termino, que este proyecto presentado el 12 de noviembre es inoportuno y perturbador para regir una elección o plebiscito a realizarse el 16 de diciembre. Este proyecto pudo presentarse, y creo que debió presentarse, desde que se supo que los grandes partidos mayoritarios proyectaban una reforma constitucional para ser plebiscitada en el correr de este año. Eso se sabe desde mayo o junio del corriente año.

SEÑOR CHIARINO. — Le rogaría al señor Senador que me demostrara por qué es perturbador el proyecto.

SEÑOR BAYLEY. — Me haría entrar al fondo del asunto señor Senador, y a eso no me puede obligar.

SEÑOR CHIARINO. — Es que tiene que entrar, porque no tiene derecho a decir que el proyecto es perturbador.

(Interrupciones. — Campana de orden).

SEÑOR BAYLEY. — Le rogaría nuevamente al señor Senador Chiarino que no me ayudara a expresar mi pensamiento, que quiero ceñir estrictamente al punto concreto que se está debatiendo.

SEÑOR PRESIDENTE. — Está en debate la moción de aplazamiento.

SEÑOR BAYLEY. — Le decía, al señor Senador sin vehemencia alguna que no quería entrar al fondo del asunto, y que no pretenda decidir él, como si fuera dueño exclusivo de la verdad, a qué cosas está obligado cada Senador, cuando se está tratando una moción de aplazamiento.

Ahora voy a decir por qué voy a votarla. La voto porque creo que este proyecto ha sido presentado intempestivamente y tardíamente, porque creo que genera problemas distintos de los que podría generar en una época alejada o desconectada de todo acto electoral ya programado y conocido con mucha anticipación, porque nada tiene que ver esto con la idea falsa de que no se darán garantías. Si hay una característica de nuestras leyes electorales y de todo el sistema electoral vigente, es que no tiene que envidiar a ningún sistema del mundo en materia de garantías y de sufragio.

SEÑOR CHOUHY TERRA. — Es muy optimista, señor Senador!

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra, en primer término, el señor Senador Arroyo Torres, después, el señor Senador Berro y, luego, el señor Senador Fusco.

SEÑOR ARROYO TORRES. — El problema de la reforma constitucional hace un largo rato que está a conocimiento público. Este proyecto fué presentado —me refiero a la del señor Senador Chiarino— en la tarde de ayer. Era valor entendido que los legisladores tenían que consultar a las autoridades de sus partidos, porque es la tradición de los partidos políticos, en lo que se refiere a leyes electorales, consultar a sus autoridades.

Inmediatamente tomamos contacto con la bancada del Partido Nacional y, ayer mismo, manifestaron ellos que debían hacerse consultas a este respecto. Por nuestra parte, pedimos la citación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Batllista en la mañana de hoy, a la hora 12. Se reunió este Comité y estudió el asunto y acordó, —vuelvo a repetir que este es un proyecto político y que tiene que tener una mayoría especial de dos tercios de votos que se forma con los votos del Partido Nacional y los nuestros— entrar en contacto con el Partido Nacional, para estudiar en conjunto y ver las posibilidades del mismo.

Esta tarde, el que habla y el doctor Cutinella, en representación del Comité Ejecutivo Nacional, entramos en conversación con los representantes del Partido Nacional. Las conversaciones se plantearon de entrada en un entendimiento común, de si podrían dar garantías. Todos pensamos lo mismo, pero, se empezaron a colocar sobre la mesa los inconvenientes del proyecto, y llegó un momento en que alguno de esos inconvenientes, yo mismo no los podía resolver, y ante la responsabilidad de dar opiniones, que nos la tenía muy afirmadas, llamé con urgencia al señor Diputado Renán Rodríguez, por considerarlo el hombre más capaz, dentro del Partido, en lo que tiene que ver con las leyes electorales. Se me informó que no podía venir porque había fallecido su madre política y, por esa razón, carecíamos del asesoramiento técnico indispensable para pronunciarnos al respecto. Mientras tanto, los nacionalistas buscaban sus técnicos, para tomar posición frente al proyecto. En esa situación estábamos cuando la Mesa nos llamó al Senado, y entramos a Sala con un pensamiento común.

Nosotros entramos a Sala para resolver este problema

de conformidad con el Partido Nacional, y el Partido Nacional estaba dispuesto a resolverlo de conformidad con nosotros.

No tuvimos tiempo material para reunirnos con ellos y resolver los problemas, porque los problemas que ellos nos plantearon y los que nosotros les planteamos a ellos, obligó a los representantes del Partido Nacional a consultar y a pedir asesoramientos porque no se animaron a afrontar esa responsabilidad, en el sentido de que este proyecto no tendría tales consecuencias o resultados.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Podrían haber avisado a sus correligionarios del Senado, antes de que hablaran.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Mientras el señor Senador Cutinella, y antes de que el Senado se quedara sin número, concurrimos a Sala sin poder llegar a un acuerdo sobre este proyecto. No se podrá negar que nosotros y el Partido Nacional le prestamos a este proyecto la máxima diligencia.

Hablamos con los Senadores del Partido Nacional y el pensamiento inicial fué que si podíamos darle esa garantía a los grupos que votaban por no, se las daríamos.

Se consideró, también, en esta materia electoral, la realización del plebiscito, en este caso, constituye un circuito único, pero el tiempo nos quemó las manos sin poder llegar a estructurar un proyecto como era nuestro deseo. Se nos llamó a Sala y ante el apremio de que el Senado quedara sin número, tuvimos que entrar a sesión. Esa es la realidad. Por eso cuando el señor Senador Viña pidió el aplazamiento de la consideración del proyecto, nos movimos totalmente de acuerdo con las conversaciones que habíamos tenido con representantes del Partido Nacional, con el que deseábamos llegar a un entendimiento, lo que no es una novedad en nuestro país, porque todas las leyes electorales han venido al Parlamento y han sido aprobadas, previo entendimiento común de los dos grandes partidos que son los que tienen los votos necesarios para sancionarlas.

SEÑOR BATLLE PACHECO. — Quiero hacer notar simplemente, que el antecedente en que fundaban su argumentación los partidarios de este proyecto, en realidad no es aplicable al caso presente, porque en el año 1942 los partidos que fueron a la elección, habían estado durante diez años en estado de abstención, y no habían podido elegir miembros para las Juntas Electorales, porque no habían participado en las elecciones anteriores.

En las circunstancias actuales, hay esta diferencia: todos los partidos políticos han integrado las Juntas Electorales de acuerdo con su caudal electoral, y si se hubiera producido una elección general de candidatos, las Juntas Electorales hubieran sido las encargadas de juzgar la elección general, donde no hubiera tenido la representación el Partido Cívico en las de muchos Departamentos.

La razón que me inclinó a hacer una excepción fué simplemente la siguiente: sin conocer cuál era el pensamiento político del Partido, porque creí que en esto había un acuerdo, no teniendo representantes en las Juntas Electorales, las resoluciones que se tomen por unanimidad no son apelables y, entonces, no puede actuar la Corte Electoral.

De manera que yo votaba este proyecto, simplemente con la aspiración de dar una garantía, pero no teniendo en cuenta los antecedentes citados, porque no se ajustan al caso.

En realidad este proyecto tiene el siguiente aspecto grave. Una Junta, que es elegida por elección popular, después resulta integrada por una ley dictada por el Parlamento, por miembros que no responden al electorado que integró esas Juntas, porque no han tenido la cantidad de votos suficientes.

A mí me pareció, desde mi punto de vista personal, que era preferible integrar las Juntas de este modo, para dar ese derecho de apelación, en el caso de que fuera necesario, para que por lo menos se dé la posibilidad, ya que todas las Juntas, —parece que se da esa casualidad, — están integradas por partidarios de la reforma, dándole así intervención a la Corte Electoral, en caso de que no hubiera unanimidad en los fallos, porque, para mí, la Corte Electoral es el más alto y competente tribunal, en esa materia, de la República.

En realidad, estamos ahora frente a una situación de hecho: no contamos con los dos tercios de votos necesarios en el Parlamento. Puede ser que si hace la consulta entre los partidos, estas razones pesen lo suficiente como para hacer la excepción en este caso, dada la división especial política del país, y atribuir a los partidos políticos, que no tienen participación, una representación en las Juntas Electorales.

Si lo votáramos en este momento, aunque yo diera mi voto a favor, no alcanzaría para resolver el problema.

De manera que por la falta de quórum y buscando una instancia, en que se pueda seguir considerando este asunto

to a ver si se logra el quórum necesario, voy a votar, también la moción de aplazamiento.

SEÑOR FUSCO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador Fusco.

SEÑOR FUSCO. — Dije ayer, según recordarán los señores Senadores, que, personalmente, me inclinaría a votar a favor de este proyecto, aunque hice en seguida la salvedad de que la determinante principal de esa actitud sería la de facilitar su andamiento, para dar tiempo, entretanto, a que se pronunciaran las autoridades porque, como lo recordaba el señor Senador Arrillaga Safons, aclaré también que, en esta materia, la práctica muy justificada y muy razonable, es la que se proceda sobre la base de las decisiones de las autoridades partidarias, ya que las leyes electorales, son, fundamentalmente, leyes de garantía para los partidos.

Ante la situación creada, entiendo que lo que corresponde es votar la moción de aplazamiento, tanto más cuanto que, en realidad, aunque personalmente pueda mantener la tesis de que no habría inconveniente en votar la proposición del señor Senador Chiarino, creo que no se deben magnificar los hechos en ningún sentido, ni en el de que esa votación, con la consiguiente conversión en ley de un proyecto, pueda significar un aporte necesario indispensable, de garantía, ni en el de que la votación contraria pueda constituir una falta de garantía, susceptible de críticas o reparos al referéndum que estamos por realizar.

Como lo decía el señor Senador Batlle Pacheco, hay una diferencia sustancial entre la situación que se planteó en 1942, evocada por el señor Senador Chiarino, y la situación presente. En 1942, se dictó una ley por la cual se le dio la representación en las Juntas Electorales a partidos que no la tenían en ellas, a los efectos de intervenir en las elecciones de ese año, en razón de que, si esos partidos no tenían representación, era porque se habían abstenido de participar en las elecciones en que esas Juntas habían sido designadas, no obstante constituir, como se presumía por anticipado y como lo acreditaron los hechos más de la mitad del electorado del país.

En cambio, ahora, si hay partidos que no tienen representación, no es por razones o causas análogas a las que mediaban en 1942, sino porque en elecciones libérrimas, a las que concurrieron, no alcanzaron el quantum necesario para lograr esa representación.

Las Juntas Electorales están constituidas por nueve miembros en todos los Departamentos del país. Quiere decir que el cociente para obtener representación en la Junta de cada Departamento es, prácticamente, bastante pequeño.

Si hay partidos que no han alcanzado a obtener esa representación, es porque no ha tenido votos suficiente como para cubrir ese cociente bastante pequeño.

No hay, pues, una identidad de situaciones, ni hay, tampoco, el riesgo de que la falta de representación de esos partidos que no tuvieron un quantum de votos suficientes como para conquistar un miembro de las Juntas Electorales, pueda significar una falta de garantías.

Las actuaciones de las Juntas Electorales son públicas. Muy frecuentemente, aunque la totalidad de los miembros de las Juntas Electorales estén de acuerdo con una resolución, ocurre que alguno de ellos —es un hecho que se ha repetido cientos de veces en la historia de las actividades cívicas del país— vote en contra, al solo efecto de hacer posible la apelación, cuando hay delegados de algún partido que quieran interponer un recurso de apelación. Pero aun cuando esto no ocurriera, siendo, como lo he expresado, públicamente activo y atento el contralor de la opinión pública, que se ejerce por medio de la prensa y que puede ejercerse —y se ejerce, también, de hecho— por medio de las ramas del Parlamento.

Cualquier incorrección en que incurriera una Junta Electoral al juzgar los actos previos o ulteriores al plebiscito, suscitaria, estoy seguro, una verdadera tormenta en el país y no sería más eficaz la vía de la apelación interpuesta ante la Junta y traída ante la Corte Electoral, que lo que puede serlo el comentario periodístico y parlamentario frente a esa incorrección, en caso de que alguna llegara a ocurrir.

SEÑOR CHIARINO. — ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FUSCO. — Sí, señor Senador.

SEÑOR CHIARINO. — Advierta el señor Senador que esa misma razón existía en el año 1942. También estaba, entonces, el alto tribunal de la opinión pública.

En cuanto al antecedente del año 1942 —y aprovecho la interrupción que me ha concedido el señor Senador— es exacto que no tiene similitud total el planteamiento, en cuanto a la calidad de los partidos que debían tener representación por el decreto ley del gobernante de hecho. Pero fíjese el señor Senador, que los riesgos —vamos a colocar

tuación de hecho planteada, lo que corresponde es votar la moción de aplazamiento.

SEÑOR RUBIO. — ¿Me permite, señor Presidente?

Estaba en la situación personal a que se han referido los señores Senadores Batlle Pacheco y Fusco; pero tengo que reconocer que es materialmente imposible sacar adelante este proyecto, en virtud de los números y en virtud de que no hay acuerdo entre los dos grandes sectores políticos.

Se me ocurre hacer una sugerencia que recogerán los letrados que hay en el Senado; creo que todavía hay tiempo de buscar la solución que persigue con su proyecto el señor Senador Chiarino, por otra vía y que me disculpen los letrados si digo un disparate. ¿No podría, —de aquí hasta el 16 de diciembre, si se ponen de acuerdo las mayorías necesarias—, dictarse una ley modificando la ley Electoral para que en esta circunstancia aunque sean dados por unanimidad, los fallos de la Junta Electoral pueden ser apelables?

Pregunto, nada más, señor Presidente, y dejo la sujeción para que la estudien los Senadores entendidos en materia electoral.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Pido la palabra.

No es nada más que para expresar que voy a rectificar mi posición.

Era evidente que estaba dispuesto a propiciar que se discutiese el proyecto de ley en el Senado esta tarde. Las razones que me movían eran que una Comisión especial lo ponía en primer término, y esa Comisión especial la integra, precisamente, el Secretario de la bancada de Senadores batllistas, señor Arroyo Torres. No podía pensar, que si era una determinación política de mi partido, como Senador no estuviera enterado de ella; enterado, ahora, por disciplina partidaria rectifico mi posición.

Nada más.

SEÑOR GALLINAL. — No he tenido tiempo, confieso, de estudiar este proyecto y, sobre todo, el problema que se ha planteado en el Senado, es decir, si es factible aplicarlo en el breve plazo que queda para la realización del plebiscito; pero declaro que votaré esta garantía o cualquier otra que se proponga, cuando llegue a la persuasión de que ella es prácticamente aplicable. Daré mi voto a cualquier clase de garantía que sea propuesta y que tenga esas condiciones indispensables.

Nada más.

SEÑOR CORREA. — Pido la palabra.

Nosotros reconocemos la inoperancia en insistir en que se considere este asunto, ya que los dos Partidos mayoritarios se han expresado en el sentido de su aplazamiento.

No obstante hemos acompañado con calor la iniciativa del señor Senador Chiarino, consecuentes con la conducta política adoptada por nuestro partido, cuando núcleos de oposición concurren a los atrios electorales y no tenían representación en las Juntas Electorales.

Se ha dicho, señor Presidente, que este es un proyecto perturbador, que trastornaría el mecanismo electoral. Puedo significar, señor Presidente, que lo único que podría trastornar en este momento, sería la integración de las mesas receptoras de votos ya que el precepto de la ley electoral establece que estas se integrarán por listas suministradas por los dos partidos de la mayoría que integran las Juntas Electorales. Vale decir que estas integraciones eventuales en nada trastornan la marcha normal y el mecanismo legal a que se ajustan las Juntas Electorales. Los Partidos de a mayoría tendrán asegurada la mayoría en la integración de las mesas receptoras de votos, ya que estas mesas se integran con dos miembros de la mayoría y uno del Partido que le sigue en número de votos.

Quiere llamar la atención del Senado en cuanto a que se ha afirmado de que esto trastornaría todo el mecanismo electoral y aparece así como un exabrupto traído en última instancia, en las postrimerías del plebiscito. Nosotros repito, con calor hemos acogido esta iniciativa consecuentes con la posición adoptada oportunamente por nuestro Partido Político.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del señor Senador Viña, para que se aplaze la consideración de este asunto.

(Se vota: Afirmativa).

SEÑOR BERRO. — Pido la palabra.

Quiero dejar expresa constancia de que he votado afirmativamente la moción de aplazamiento y que si se hubiera tratado hoy este asunto, habría votado en contra, por no haber formulado opinión sobre él, las autoridades partidarias.

3

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a dar cuenta de dos asuntos entrados.

(Se lee:)

"Los representantes de la organización de defensa industrial gráfica de Sindicatos de la prensa periódica del Uruguay, presenta un escrito, con un anteproyecto de ley, solicitando que sus disposiciones se incorporen al proyecto a estudio del Senado sobre Carnet de Trabajo".

—A sus antecedentes.

"El Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 180 de la Constitución solicita venia para integrar los siguientes Directorios: de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Trabajos Rurales, Domésticos y Pensiones a la Vejez".

—A la Comisión respectiva.

9

SEÑOR VIÑA. — Pediría, señor Presidente, dada la urgencia que existe, —hoy finaliza prácticamente el período—, y dado que las Cajas de Jubilaciones necesitan se nombre sus directorios, que declararíamos grave y urgente las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para efectuar tales designaciones y las consideraríamos sobre tablas.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — No podemos hacerlo.

SEÑOR ARRILLAGA SAFONS. — ¿Me permite, señor Presidente?

Voy a cumplir un cometido que me ha confiado la Comisión de Asuntos Administrativos que puede tener alguna conexión con estos nuevos pedidos de venia que formula el Poder Ejecutivo.

Deseo formular una observación que puede ser de interés y acaso corresponda su aplicación a las venias que se solicitan ahora.

Digo esto, para que el señor Senador Viña lo tenga presente.

La Comisión de Asuntos Administrativos, estudió la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para integrar el Directorio del Banco de Seguros, pero no se pudo expedir, en virtud de que no se ha cumplido el requisito exigido por el artículo 185 de la Constitución en su parte final, que establece que podrán ser reelectos los miembros de los Directorios de entes autónomos, siempre que su gestión haya merecido dictamen favorable del Tribunal de Cuentas.

Todos los candidatos que propone el Poder Ejecutivo para integrar el Directorio del Banco de Seguros, son ciudadanos que han ejercido cargos de entes autónomos. En consecuencia, es de estricta aplicación la segunda parte del artículo 185 de la Constitución.

Por ello la Comisión de Asuntos Administrativos, pide que se recabe del Poder Ejecutivo el dictamen preceptuado por la disposición a que me he referido.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Para la integración del Directorio del Banco de Seguros y de los demás entes autónomos que se encuentren en ese caso.

SEÑOR GRAUERT. — Corresponde lo mismo en lo relacionado con las venias solicitadas para la integración de los Directorios de las dos Cajas. De manera que el pedido debería hacerse con carácter general.

SEÑOR VIÑA. — ¿Me permite, señor Presidente?

Formulo moción en el sentido de que, dada la urgencia que existe —todo el mundo sabe que existe urgencia en integrar los Directorios de las Cajas— una vez que se haya expedido el Tribunal de Cuentas, sea citado extraordinariamente el Senado para considerar estos pedidos de venia y los relacionados con la integración de los demás Directorios.

SEÑOR GRAUERT. — No, señor Senador. Para tratarlas en Comisión.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fusco).

10

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a dar cuenta de otro asunto entrado.

Léase.

(Se lee:)

La Cámara de Representantes remite, con aprobación un proyecto de ley por el que se crea como servicio descentralizado del Ministerio de Obras Públicas, la Administración de Ferrocarriles del Estado.

—A la Comisión de Constitución y Legislación.

11

SEÑOR CHOUHY TERRA. — Pido la palabra.

Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.

Ministerio de Hacienda

Montevideo, 20 de agosto de 1951.

Señor Presidentede la Asamblea General, doctor Alfeo Brum.

Señor Presidente:

El pueblo y las autoridades de la Florida, constituidos en comisión, se proponen conmemorar dignamente el 126 Aniversario de la Declaratoria de la Asamblea de la Florida. Asimismo se ha constituido un comité local integrado por el señor Jefe de Policía del Departamento, el señor Intendente Municipal, el señor Juez Letrado, el señor Presidente de la Junta Departamental, el señor Jefe del Batallón de Ingenieros N.º 2 y destacados vecinos, a fin de organizar los diversos actos programados con tan alto fin.

El Poder Ejecutivo, compenetrado de los propósitos de las autoridades y del vecindario, solicita de la Asamblea General la aprobación del adjunto proyecto de ley, por el cual se conceden al Comité \$ 12.000.00 (doce mil pesos) a tomarse de Rentas Generales para hacer frente a los festejos programados y a gastos efectuados en el año de 1949 que no han sido solventados, existiendo en la actualidad una deuda de \$ 7.000.00 (siete mil pesos) que la Comisión Patriótica Organizadora de los actos a realizarse el 25 y 26 del corriente, considera impostergable abonar.

A esas circunstancias se agregan las permanentes. El propósito renovado del Poder Ejecutivo de propender a exaltar los nobles sentimientos del culto a la Patria, a sus grandes hombres y a sus máximas efemérides. En la cronología de nuestra historia tan gloriosa, el 25 de Agosto es fecha fundamental. Fué el paso previo y definitivo para alcanzar la Independencia lograda en 1828 al firmarse el Convenio Preliminar de Paz de Río de Janeiro y al jurarse la Constitución Patria el 18 de Julio de 1830. En el propio lugar de los hechos junto a la Piedra Alta en la ciudad donde se constituyó el Primer Gobierno Civil ante el cual el General Juan Antonio Lavalleja, Jefe de la Revolución, rindió su espada de acatamiento a las fórmulas jurídicas que iban a regir la nacionalidad y donde poco después se hicieron las célebres declaraciones del 25 de Agosto de 1825, el Pueblo Oriental, afirmará, una vez más su fervorosa adhesión a la libertad, a la democracia, y al republicanismo, siguiendo el ideario artiguista y la lección magnífica de los próceres civiles y militares que forjaron la Nación.

Por tales fundamentos solicita la pronta sanción del adjunto proyecto de ley.

Saluda a la Asamblea General con su más alta consideración. — ANDRES MARTINEZ TRUEBA. — EDUARDO BLANCO ACEVEDO. — HECTOR ALVAREZ CINA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo, para disponer de Rentas Generales de la suma de \$ 12.000.00 (doce mil pesos), con destino a contribuir a los gastos que demandó a la Comisión Patriótica Organizadora de los actos conmemorativos de la Asamblea de la Florida, la realización de festejos populares llevados a cabo en el curso del año 1949, así como de los que supondrán aquellos que se propone efectuar en 1951, de análogo contenido.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Montevideo, 20 de agosto de 1951,

EDUARDO BLANCO ACEVEDO. — HECTOR ALVAREZ CINA.

La Cámara de Representantes en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo, para disponer de Rentas Generales de la suma de doce mil pesos (\$ 12.000.00), con destino a contribuir a los gastos que demandó a la Comisión Patriótica Organizadora de los actos conmemorativos de la Asamblea de la Florida, la realización de festejos populares llevados a cabo en el curso del año 1949, así como los realizados en el corriente año, de análogo contenido.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de octubre de 1951,

ARTURO LEZAMA, Presidente. — Gonzalo de Salterain Herrera, Prosecretario".

SEÑOR PRESIDENTE. — En 1.ª discusión general. Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

En discusión particular el artículo primero.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

—El artículo siguiente, es de orden.

Queda aprobado el proyecto en primera discusión general y particular.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Moción para que se suprima la segunda discusión.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del señor Senador.

Se vota: Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

19

—En consideración el asunto que figura en cuarto término de la orden del día, relativo al proyecto de ley por el que se contribuye con la suma de \$ 15.000.00 a los actos realizados el 21 de octubre de 1950, organizados por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.

Léase.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Que se suprima la lectura, señor Presidente.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar si se suprime la lectura.

Se vota: Afirmativa.

Los antecedentes cuya lectura se suprime, son los siguientes:

"Carpeta 406 de 1951. — Comisión de Fomento. — Rep. 196 de 1951.

Poder Ejecutivo.

Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, noviembre 25 de 1950.

A la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo eleva a ese alto Cuerpo, el presente Mensaje y adjunto proyecto de ley, animado por el deseo de satisfacer las aspiraciones de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, — que hace suyos, — tendientes a obtener un subsidio para ser destinado a sufragar los gastos irrogados con motivo de la celebración de la XIII Exposición Nacional y XV Concurso Departamental de Reproductores Seleccionados, inaugurada exitosamente, el día 21 de octubre del corriente año.

El otorgamiento de subsidios a la producción agropecuaria, ha constituido a través de los largos años en que ha predominado esa política, el más eficaz aliciente que ha recibido el hombre de campo en su constante y afanosa labor en pro del progreso de la economía nacional. Los resultados de esa orientación se han traducido en un mejoramiento general en todos los órdenes de la producción agropecuaria en primer término y en segundo, ha servido para alentar los esfuerzos de superación de una innúmera cantidad de trabajadores rurales.

La ley Nº 7.930, de fecha 13 de abril de 1926, instrumento legal rector de todo lo relacionado con la dispensa de subsidios, fué el fruto de la preocupación que tuvo el legislador en un momento crítico para el desarrollo de nuestro medio rural, los fines perseguidos por esa ley fueron no solamente logrados, sino incluso superados en gran medida, pudiéndose afirmar que, en la actualidad, dicha disposición legal, exige una inmediata modificación, a fin de adecuarla a las nuevas circunstancias que, a lo largo de 24 años, han introducido en la fisonomía del país, una profunda si que beneficiosa transformación. Los recursos que en la misma se prevén para atender los subsidios, como

—Continúa la orden del día con la consideración de la solicitud del Colegio de Abogados del Uruguay en el sentido de que se ceda la Sala de Sesiones del Senado y de sus Comisiones, a los integrantes de la VII Conferencia Interamericana de Abogados.

Léase.

(Se lee).

"Colegio de Abogados del Uruguay

Montevideo, 25 de octubre de 1951.

Señor Presidente del Senado, Dr. Alfeo Brum.

Presente:

Ilustrado compatriota:

Como es de su conocimiento, entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre próximos se realizará en Montevideo la VII Conferencia Interamericana de Abogados, a la que concurrirán numerosas delegaciones de abogados extranjeros.

Con ese motivo el Colegio de Abogados del Uruguay que presido, viene cumpliendo una intensa tarea de organización para que la citada Conferencia se desarrolle normalmente llevando a cabo los fines que constituyen su razón de ser.

Los locales en que han de realizarse las sesiones plenarias y el trabajo de las comisiones es uno de los puntos que hemos considerado muy atentamente y estimamos en definitiva que el marco más digno y adecuado para esas Jornadas del Derecho, es el del Palacio Legislativo.

Es por esa razón que solicitamos a la Cámara de Senadores de su digna Presidencia, el uso de la Sala de Sesiones y de las Salas de Comisiones. En la primera realizaría sus sesiones el Consejo de la Conferencia, y en las otras cumplirían su trabajo las comisiones de la misma.

Las sesiones plenarias se realizarían en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, y en las salas de Comisiones de este Cuerpo trabajarían el resto de las comisiones.

Esperando de su reconocida comprensión una acogida favorable a esta solicitud, aprovecho esta oportunidad para saludarlo con mi más alta consideración.

Eduardo J. Couture.
Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. — Está a consideración.

SEÑOR ZABALA MUNIZ. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ZABALA MUNIZ. — La Comisión de Asuntos Administrativos a la que fué pasado este proyecto de resolución, informa que no ve inconveniente en que el Senado ceda alguna de sus oficinas, no siendo especialmente la Sala de Sesiones ni de las Comisiones, que serán necesarias.

SEÑOR HARDO. — Apoyado.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — La razón de esta limitación está en que la Cámara de Representantes ya cedió su sala para la reunión de la Conferencia de Abogados.

Nada más, señor Presidente.

(Apoyados).

SEÑORA PINTO DE VIDAL. — ¿Me permite, señor Presidente?

Voy a fundar mi voto en el sentido afirmativo con relación a lo que acaba de expresar el señor Senador Zavala Muniz.

Como se recordará en el Senado, yo había pedido que se cediera también la Sala de Sesiones del Senado. Fue contrario, en cierto sentido, algún señor Senador. Pasó a la Comisión y la resolución de ésta es que se ceda algunas oficinas o algunas salas de Comisiones a esa Conferencia.

En ese sentido quiero dejar establecido mi voto afirmativo.

SEÑOR CHIARINO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CHIARINO. — Si hubiera habido ambiente en el Senado habría votado favorablemente, ceder, también, el Salón de Sesiones del Senado. No creo que haya ningún motivo especial para que haya una diferencia de criterio entre la Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes y la del Senado.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — No es una diferencia de criterio, señor Senador, sino que sería hacer una cesión

que se considera inútil puesto que ya tiene la Sala de la Cámara de Representantes.

SEÑOR CHIARINO. — Frente al argumento del señor Senador Zavala Muniz le manifiesto que me refería a algunas alegaciones formuladas en Sala por algunos señores Senadores invocándose el argumento de que en general no se ceda la Sala de Sesiones.

Pero además, contestando concretamente lo que manifestaba el señor Senador, ratifico lo que ha expresado la señora Senador Pinto de Vidal. Habían solicitado esta Sala porque manifestan que, estando integradas algunas de las Comisiones especiales por un número muy elevado de personas, entendían que era interesante para ellos hacer esas deliberaciones en la Sala del Senado.

No voy a hacer hincapié, no voy a insistir en ello. Deseo decir simplemente, porque no quiero que mi voto en silencio pueda parecer un total asentimiento al informe de la Comisión, que no hubiera tenido reparos, en ceder la Sala del Senado con mucho gusto, reservándome para un futuro, hacer lo mismo frente a solicitudes de la jerarquía de la que se formula al Senado de la República.

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — ¿Me permite, señor Presidente?

El Congreso de Abogados se va a reunir, en fecha próxima, y, ¿qué es lo que obsta para que se le conceda esta Sala?

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — He dicho, señor Senador, que lo que obsta es que el Congreso de Abogados, pidió simultáneamente esta Sala y la de la Cámara de Representantes, la que ha sido cedida. Lo que obsta es la redundancia del pedido de las dos Salas de Sesiones para una misma cosa.

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — A mi juicio, señor Presidente, eso no es obstáculo; al contrario, el hecho de que se hayan pedido las dos salas, significa que podemos conceder las dos, porque quien pide es el que conoce sus verdaderas necesidades.

Creo que debemos ser muy generosos en cuanto a presar nuestra Sala de Sesiones.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — No apoyado.

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — Hasta por motivos de orden estético, estamos obligados a permitir que aquí entren muchos a admirar estos mármoles, estas bellezas.

(Interrupción del señor Senador Zavala Muniz).

—Señor Senador Zavala Muniz; si desea una interrupción, con mucho gusto se la concedo, porque yo no tengo el hábito de hablar así, en el barullo.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Disculpeme, señor Senador. Le pido la interrupción, para que no crea que lo que dije no debía oírlo.

Digo que en lo que se refiere a razones estéticas, las puertas están abiertas.

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — A veces por motivos inexplicables las cerramos, como en la ocasión, cerrando las puertas cuando se nos hace un pedido tan sencillo. Más; siempre he pensado que debe extenderse nuestra generosidad a núcleos populares para que sesionen en nuestra casa. Yo no tendría ningún inconveniente en favorecer esa práctica, siempre que existiera un contralor necesario, con la finalidad de que esta casa sea visitada por el mayor número, porque esas visitas favorecerán la cultura popular.

SEÑOR CHIARINO. — Señor Senador; ratificando lo que usted manifiesta debo expresar que de acuerdo con la solicitud formulada por el Colegio de Abogados, queda expresamente dicha la razón de por qué solicitaba las dos Salas.

En efecto, su nota, elevada a la Presidencia del Senado dice así, en sus dos últimos párrafos: "Es por esa razón que solicitamos de la Cámara de Senadores de su digna Presidencia el uso de la Sala de Sesiones y de las Salas de Comisiones; en la primera realizaría sus sesiones el Consejo de la Conferencia, y en las otras cumplirían su trabajo las Comisiones de la misma. "La Conferencia tiene además, un Consejo que integran cincuenta personas, que no va a tener, por lo menos, la suficiente comodidad para sesionar, aún en la Sala llamada de Ministros, de modo que quería robustecer el argumento del señor Senador González Conzi con esta alegación que formula el Colegio de Abogados en la propia nota enviada a la Presidencia del Senado.

SEÑOR GALLINAL. — Tengo entendido, señor Presidente, que la conferencia para la que se solicita la Sala del Senado, es de una gran jerarquía y que ha de tener repercusiones internacionales. Asistirán a nuestro país, según se me informa, no menos de trescientos abogados provenientes de diversos países, así como también una cantidad de observadores de distintas naciones. Por consiguiente, reviste el carácter de una verdadera conferencia internacional, y en ese sentido no tengo ningún inconveniente, —por el contrario, lo hago con mucho gusto—,

en votar afirmativamente el pedido formulado por el Colegio de Abogados.

SEÑOR PRESIDENTE. — Como no se ha articulado un proyecto de resolución, la Mesa pensaba tomar como moción la formulada, un poco con ese carácter, por el señor Senador Zavala Muniz.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Totalmente con ese carácter.

SEÑOR PRESIDENTE. — Pero esa moción excluye del préstamo la Sala de Sesiones del Senado. Para poner a votación una cosa distinta la Mesa necesitaría que se hiciera moción concreta en otro sentido, y entonces las pondría a votación por su orden.

SEÑOR HAEDO. — Que se vote en primer término la proposición de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. — Coinciden dos mociones en el mismo sentido: la de los señores Senadores Chiarino y Pinto de Vidal.

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — Moción para que se abra la Sala de sesiones del Senado además de las de Comisión.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar en primer término la proposición de la Comisión que, como no ha sido articulada como proyecto de resolución, podría concretarse así: Que se concedan algunas Salas del Senado.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — A los efectos de la instalación de la Conferencia de Abogados, que tendrá su sede en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. — Se facultaría a la Secretaría para determinar cuáles son las Salas que van a cederse.

Se va a votar la moción.

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — ¿Qué es lo que se vota?

SEÑOR PRESIDENTE. — La proposición de la Comisión, después se votarán las otras, que no son excluyentes así lo entiende la Mesa.

Se va a votar la proposición de la Comisión.

(Se vota: Afirmativa).

— Se va a votar la moción formulada por los señores Senadores Pinto de Vidal y Chiarino, para que también se abra la Sala de Sesiones del Cuerpo.

(Se vota: 7 en 18 Negativa).

27

SEÑOR GRAUERT. — Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Senador Grauert para una moción de orden.

SEÑOR GRAUERT. — Los asuntos que vienen a continuación no podrán, algunos de ellos, ser tratados y, otros, van a dar lugar a debate. Por lo tanto solicitaría que antes de levantar esta sesión para pasar a cuarto intermedio hasta las veintidós horas, se trataran los asuntos que figuran con los números 13, 14 y 15, que seguramente van a dar lugar a discusión.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar si se aplazan los asuntos que figuran en 10, 11 y 12 lugar.

28

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Si me permite, señor Presidente, agregaría que también se realizara una breve sesión secreta para considerar el pedido de venia para designar Fiscal Letrado del Departamento de Flores, asunto que la Comisión está en condiciones de informar.

SEÑOR BERRO. — Pero ese asunto necesita 19 votos conformes y hay solamente 18 señores Senadores.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Si no tenemos número para considerarlo, nos vamos.

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del señor Senador Grauert, para que se aplacen los asuntos que figuran con los números 10, 11 y 12 del orden del día.

(Se vota: Afirmativa).

29

— Continúa la orden del día con la consideración del proyecto de ley que aprueba la Convención Internacional de Aviación Civil adoptada por la Conferencia de Chicago el 7 de diciembre de 1944. (Carpeta 1414/949. — Rep. 200).

Léase.

SEÑOR GRAUERT. — Hago moción para que se suprima la lectura en la discusión general y particular.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción.

(Se vota: Afirmativa).

(Los antecedentes cuya lectura se suprime, son los que siguen):

Poder Ejecutivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Defensa Nacional.

Montevideo, 30 de octubre de 1946.

A la Asamblea General:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 21 del artículo 157 de la Constitución de la República, tengo el honor de someter a la consideración de la Asamblea General el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueban el Convenio Provisional de Aviación Civil Internacional y la Convención Internacional de Aviación Civil, adoptados en la Conferencia de Chicago, el día 7 de diciembre de 1944.

Como es notorio, según informó la Comisión Especial que nombró el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 1.º de agosto de 1945, la Conferencia tuvo su origen en una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos de América. Cuando se discutía, en el Comité Consultivo Económico Financiero Interamericano, en febrero de 1944, la agenda sobre transportes y comunicaciones para la Conferencia Técnica Económica Interamericana, cuya celebración se había aplazado tantas veces, el señor Adolfo A. Berle, Secretario de Estado Auxiliar de los Estados Unidos de América, declaró que su Gobierno se proponía iniciar conversaciones con algunas de las Naciones Unidas, a fin de concertar, en fecha próxima, una Conferencia Internacional de Aviación. Nuestro Gobierno recibió la invitación formal de ese Gobierno, el 12 de setiembre de 1944 (y en la misma nota, se indicaban los puntos en que se había llegado a una conformidad sustancial, en las conversaciones exploratorias bilaterales mantenidas por Estados Unidos de América con los Gobiernos que habían demostrado tener interés especial en la aviación civil de post-guerra y, de una manera particular, en el fomento de los transportes aéreos internacionales. Las cuestiones así acordadas versaban sobre:

- A) El derecho de tránsito y no tráfico;
- B) La no exclusividad de las concesiones internacionales;
- C) La aplicación del cabotaje al tráfico aéreo;
- D) La fiscalización de tarifas y de la competencia;
- E) La necesidad de uniformar las normas de funcionamiento y seguridad;
- F) La uniformidad y coordinación de las ayudas a la navegación aérea y facilidades de comunicación;
- G) El uso de aeródromos y otras facilidades sobre una base no discriminatoria; y
- H) La administración de aeródromos y facilidades en ciertas regiones.

También se había reconocido, en principio, que para alcanzar y hacer efectivos tales objetivos, sería conveniente la colaboración internacional, probablemente por medio de un organismo aeronáutico internacional, por más que existieran ciertas divergencias acerca de la amplitud de las facultades reglamentarias a delegarse en ese organismo, en materia económica.

En tales condiciones, el Gobierno de Estados Unidos de América creía que se podría convocar con provecho una Conferencia Internacional de Aviación Civil, con el propósito de acordar el aumento de los servicios actuales y el pronto restablecimiento de rutas y servicios aéreos internacionales para funcionar dentro y también con destino a los territorios donde hubiera cesado, entonces, el peligro de interrupción por motivos militares, quedando entendido que los arreglos concertados quedarían en vigencia durante un período de transición.

La Conferencia, además, podría acordar en la medida de lo posible los principios de una estructura internacional permanente para la aviación civil y el transporte aéreo, creando comités interinos apropiados para preparar propuestas definitivas. La decisión definitiva sobre esas propuestas, en base a la experiencia positiva obtenida durante el período interino, podría tomarse, a su vez, en una conferencia posterior o por aprobación directa de los Gobiernos, sin necesidad de una nueva conferencia.

Concretamente, el Gobierno de Estados Unidos sugirió:

I. A) El establecimiento de arreglos provisorios para rutas mundiales mediante un acuerdo general a concertarse en la Conferencia. Estos arreglos servirían de base al pronto establecimiento de servicios internacionales de transportes aéreos por países apropiados.

B) También se pediría a los países que participen en

la Conferencia, que se comprometan a otorgar los derechos de aterrizaje y tránsito necesarios para hacer efectivos los arreglos provisorios y servicios aéreos mencionados.

II. El establecimiento de un Consejo interino para servir de "clearing" y agencia asesora durante el período de transición. Este Consejo recibiría y estudiaría las recomendaciones de cada uno de los Comités mencionados más adelante; informaría con respecto a cambios deseables en las rutas y los servicios durante el período interino, cambios que estarían supeditados a la aprobación de los países servidos por dichas rutas y servicios; mantendría enlace con cada uno de los países participantes; intervendría en los estudios y presentaría informes a los Gobiernos interesados sobre el desarrollo del transporte aéreo durante el período de transición y sometería recomendaciones para ser consideradas en cualquier conferencia internacional posterior.

III. Un acuerdo sobre los principios que deben observarse al crear un organismo aeronáutico internacional permanente y una convención multilateral de aviación, que abarque los temas del transporte aéreo, de la navegación aérea y de los aspectos técnicos de la aviación, con el objeto de desarrollar los detalles y formular propuestas para poner en vigencia los principios acordados. Se establecerían los siguientes Comités para trabajar bajo el contralor del Consejo interino:

A) Un Comité encargado de observar y estudiar todo lo relacionado con el establecimiento de las rutas y los servicios a establecerse de acuerdo con lo expresado antes (I); de coordinar informaciones sobre el tráfico; de estudiar los problemas pertinentes, y de recomendar los cambios deseables en las rutas y los servicios. Este Comité también formularía estudios y recomendaciones sobre la futura pauta de estas rutas y servicios.

B) Un Comité técnico central con sub-Comités subordinados que trabajarían en estrecha colaboración con el Comité subsiguiente y que estaría encargado de considerar el campo técnico en toda su extensión, inclusive normas, procedimientos y requisitos mínimos, y de formular recomendaciones para su aplicación y adopción a la brevedad posible.

C) Un Comité encargado de redactar un proyecto para la constitución de un organismo internacional permanente y una nueva convención multilateral de aviación, teniendo en cuenta las consideraciones antedichas como base de discusión.

Ahora bien, en la época en que el Gobierno de Estados Unidos invitó para la Conferencia, la Delegación Uruguaya a la Conferencia de Comisiones de Fomento Interamericano, realizada en Nueva York, del 9 al 18 de mayo de 1944, presentó su informe, cuyo redactor, Ministro Plenipotenciario doctor don José A. Mora Otero, se refería en estos términos a los problemas de la aeronavegación internacional:

"El despliegue futuro de los servicios aéreos y la rica experiencia que se está recogiendo en el transcurso de la guerra fueron temas de vivo interés para las Delegaciones. Nuestra generación ha tomado contacto con un nuevo elemento de la vida del hombre y se ha originado el concepto de "potencia aérea". Esta potencia es la suma de algunas condiciones esenciales: fuerzas aéreas, transporte aéreo, bases aéreas y capacidad productiva de aviones (Eugene W. Wilson, Vicepresidente, United Aircraft Corporation).

Del dominio de ese poderío dependerá la guerra o la paz. Las Naciones Unidas o la futura Comunidad de los Estados deberá salvaguardar la paz con el vigor de esa arma. No habrá de mantenerse una inmensa organización únicamente en espera de que algún Estado cometa un acto de agresión. El mejor método será el mantenimiento de miles de pilotos en constante servicio comercial. Una fuerza militar aérea separada y un sistema aéreo comercial, costarán cada uno por su lado, mucho más y serán menos efectivos que la combinación de ambos, según la afirmación del Vicepresidente Henry A. Wallace. Las posibilidades financieras para los transportes comerciales abren perspectivas verdaderamente alentadoras. Parece que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recauda más dinero por la venta de sellos de correo que lo que paga a las líneas aéreas por concepto de transporte postal. El gran problema, por el momento, en lo que respecta a las líneas mundiales, es saber si habrá absoluta libertad para los vuelos por sobre los territorios controlados por soberanías diferentes, con la necesaria utilización de los aeropuertos, o si se entrará en una lucha de competencias nacionales. El ideal es establecer la mayor amplitud o igualdad de derechos para todas las naciones, en esta materia, en una especie de igualdad de oportunidades. Tal es lo que reclamaba Herbert Feis (Our Economic relations with Britain, Foreign Affairs, abril 1943).

Pero el Imperio Británico, por ahora, tiene una situación geográfica privilegiada y todavía sus dirigentes no

han dicho la última palabra, en cuanto a las fórmulas comerciales para la utilización de sus bases aéreas distribuidas en todos los caminos del mundo. Justamente en los días en que se celebraba la Conferencia de Nueva York, el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, señor A. A. Berle, se encuentra en Londres para iniciar conversaciones exploratorias. Lord Beaverbrook dió luego en la Cámara de los Comunes una impresión acerca de un posible acuerdo por el cual las líneas británicas conservarían el monopolio sobre el tráfico de Gran Bretaña hacia todas las partes del Imperio, sin abandonar el derecho a los transportes aéreos para cualquier otra parte del mundo. Tal impresión fué de inmediato desmentida por el Secretario de Estado, señor Cordell Hull (The New York Times, mayo 17 de 1944).

Claro está que las comunicaciones a través del Continente americano ofrecerán menos dificultades y la Conferencia de Nueva York se limitó a recomendar las mayores facilidades para los servicios tanto internacionales como nacionales, buscando la uniformidad de reglamentos y procedimientos en materia de identificación de aeropuertos y aviones, las comunicaciones radiotelegráficas, las medidas de seguridad, despachos, formalidades de importancia y de exportación, etc.

La situación del Uruguay en el problema aéreo, ofrece, sin duda, características especiales, pues no es solamente ruta americana, sino que está también en el camino de las líneas hacia Europa y Africa. Especialmente existen posibilidades interesantes para el comercio con Sud Africa y así hacia figurar al futuro aeropuerto de Montevideo, el mapa mundial preparado por la fábrica de aviones británica de Havilland, antes de la segunda guerra mundial".

Las sugerencias del Gobierno de Estados Unidos de América, acerca de la convocatoria y temario de la Conferencia Internacional de Aviación Civil, fueron estudiadas por la Comisión Asesora Especial de Transportes Aéreos Internacionales, del Ministerio de Defensa Nacional y por las Comisiones Económica, Financiera y Social, y Jurídica Internacional de Problemas de Post-guerra del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos informes constituyeron la base de las instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo a la Delegación de la República que actuó en la Conferencia, integrada por el señor Capitán de Navío doctor Carlos Carbajal, como Presidente y por el señor Coronel don Medardo R. Farías.

Terminada la Conferencia, la Delegación presentó su informe, del cual interesa destacar especialmente la parte segunda, relativa al clima intenso en que se desarrollaron las actividades de esa reunión internacional, ante las tendencias en pugna sustentadas por Estados Unidos de América y Gran Bretaña, acerca del problema fundamental del régimen de las comunicaciones aéreas internacionales que, en cierto modo, evocan el viejo pleito de las comunicaciones marítimas, fallado a favor del "mare liberum".

En efecto, frente al criterio defendido principalmente por Estados Unidos de América, de la libertad del aire y polirizado en torno de las cinco libertades:

- I de sobrevuelo sin aterrizar;
- II de aterrizar por motivos solamente técnicos;
- III de transportar pasajeros, correo y carga desde el país de origen de la aeronave;
- IV de transportar pasajeros, correo y carga hacia ese mismo destino; y
- V de transportar pasajeros, correo y carga entre cualesquier países.

Gran Bretaña y otros Estados sostenían, en cambio, un criterio más restringido, tendiente a reconocer una mayor participación en el transporte aéreo y, sobre todo, en determinadas comarcas, a las naciones más directamente interesadas en ciertas zonas del mundo, asignando, además, primordial importancia al grado de preparación en que se hallaban las naciones afectadas por la guerra.

La Embajada de la República en Londres transmitió al Ministerio de Relaciones Exteriores, como la más elocuente interpretación del punto de vista británico sobre el resultado de la Conferencia de Chicago, la que dió el Mayor Colston Sheppher, redactor diplomático del "Sunday Times", de la que se toman los párrafos principales y que ilustran, a la vez, sobre el proceso interno de la Conferencia:

"Muchos devotos de la aviación deben haber perdido toda la esperanza de comprender la alta política y los complicados manejos comerciales que se pusieron de manifiesto en la Conferencia Internacional de Aviación Civil, en Chicago. El entusiasta que se lamenta: "Ya no se trata de aviación; más bien de política internacional", me-

rece cierta simpatía. A fin de cuentas, la Conferencia no resolvió ninguno de estos problemas de política económica, pero, en cambio, estableció un organismo encargado de continuar la discusión.

En la actualidad, algunas naciones se han comprometido a conceder dos de las cuatro (o cinco) libertades del aire. Algunas han convenido en conceder las cuatro libertades y agregar a ellas, la quinta especialmente pedida por los Estados Unidos para asegurarse que no habría restricciones efectivas sobre la competencia libre a lo largo de las líneas aéreas principales del mundo. Esta segunda clase concederá permisos de vuelos incondicionales a otras naciones. La clase primera sólo concederá permisos de vuelo bajo condiciones especiales. A los países con líneas aéreas, que deseen iniciar pronto sus operaciones, este regateo pudiera constituir un estorbo y las condiciones impuestas, enojosas. De aquí que exista probablemente un impulso comercial, tanto como político e idealista, hasta la aceptación más plena de las cuatro libertades.

Brevemente definidas, las cuatro libertades del aire parecerían bastante inocuas. El desacuerdo surge acerca de las libertades 3 y 4, no porque las naciones representadas en la Conferencia deseen excluir los transatlánticos aéreos de otras naciones, sino porque algunas naciones desean asegurarse de que no quedarán excluidas del campo del transporte aéreo internacional, como consecuencia de sus infortunios en el período de la guerra.

En Chicago, Gran Bretaña constituyóse en paladín de aquellas naciones no preparadas para iniciar sus operaciones aeronáuticas debido a su larga absorción en la guerra. Gran Bretaña relacionaba estas proposiciones con la defensa del control de las competencias, como medio para evitar la acritud que puede surgir entre naciones con las formas más violentas de la rivalidad. Los Estados Unidos encabezaron el movimiento en pro de la competencia libre, proponiendo —a fin de contrarrestar el argumento de la impreparación— suministrar aeroplanos comerciales a las naciones que los necesitaran. Gran Bretaña se mantuvo firme en su plan de regulación de la competencia, mostrándose flexible hasta cierto punto en lo que se refiere a los medios para regularla.

La discusión fracasó sobre estas cuestiones. El mejor modo de explicar lo que se trataba, es referir sumariamente lo que se proponía, lo que se concedió y lo que, en última instancia, constituyó el obstáculo insuperable.

Gran Bretaña pidió a los Estados Unidos que asintiera a un plan para determinar la capacidad aeronáutica que cada nación participante en una ruta aérea particular, era libre de hacer funcionar en dicha ruta. La base consistía en el volumen de tráfico embarcado en cada país. Cada nación tendría la porción equivalente a los aeroplanos requeridos para satisfacer este tráfico, además de un amplio margen para permitir la expansión. El margen debía calcularse estimando que el promedio de carga de un avión era del 60 o/o.

Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo —con tal que se aceptase un convenio complementario— para alentar a las firmas realmente eficientes y pidieron lo que denominaban la cláusula de la escalera sin fin (escalator clause) permitiendo a los países que evidentemente realizasen buenos negocios, aumentar su cuota de aeroplanos en la ruta. El Canadá había presentado con antelación una propuesta en el mismo sentido. La proposición consistía en que cuando un país había llenado el 60 o/o de su capacidad durante un año, tuviese derecho a disponer de aviones adicionales. Gran Bretaña asintió a ello y parecía haberse obtenido una amplia medida de acuerdo. Incluso los jefes de las delegaciones se permitieron grandes esperanzas.

Es en ese momento que los Estados Unidos introdujeron un nuevo elemento de discusión. Pretendieron que las libertades 3 y 4 debieran permitirles la carga y descarga de tráfico de corta distancia en escalas intermedias sobre líneas aéreas de radio mayor. Esto, en sí, pudiera haberse resuelto estipulándose precios diferentes para pasajeros y carga destinados a los transatlánticos rápidos y cómodos, en comparación con los aviones menos rápidos y menos lujosos explotados por las naciones más pequeñas, en líneas locales. Desgraciadamente, esto no era todo. Los Estados Unidos reclamaban, también, el derecho de contar este tráfico en escalas intermedias como incluido en el 60 o/o requerido bajo la cláusula de la "escalera sin fin" y luego, disponer de servirlos adicionales ora por toda la línea o bien por las partes de mayor tráfico de esa ruta. Este es el significado que daban los Estados Unidos a la "quinta" libertad.

Esto pareció al observador, como un intento de evadir el plan inicial de dividir la explotación. Introducía también, el medio de disponer de las líneas aéreas de aviones sin finarario fijo (similares a buques "tranmps") no obstante los acuerdos de las naciones de que las rutas aéreas em-

pezaran o terminaran en territorio metropolitano. Podría interpretarse como un ardid para lograr lo mejor del tráfico de todas las líneas aéreas que desde los Estados Unidos se dirigieran a cualquier parte del mundo. Gran Bretaña rehusó convenir en ello y en el curso de los diez días siguientes de discusión, no encontró medio de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Este desacuerdo será objeto de ulterior discusión en el Consejo interino.

Durante las sesiones de la Conferencia, los periódicos de los Estados Unidos presentaron a Gran Bretaña como el obstáculo que se interponía en la libertad del aire. La relación del origen del desacuerdo, muestra cómo Gran Bretaña fué puesta en situación de que se le imputase dicha acusación. También muestra que la aceptación de las peticiones de los Estados Unidos tal vez hubiese dado a esta nación una injusta ventaja el principio, creando obstáculos a las demás, que quizás no hubiesen podido nunca ser superados. Es fácil de imaginar el descontento, las disputas y las enemistades que podrán surgir en estas condiciones.

En la actualidad, hay países deseosos de que otras naciones más capacitadas transporten su carga y pasajeros. Entre estas naciones no hay ninguna que no haya sufrido en la guerra y que no desee una aviación civil propia que coadyuve en desarrollar su industria aeronáutica para que sea en la defensa aérea, lo que su marina mercante ha sido a sus armadas. Estas naciones desean retener el control de la competencia, a fin de poder asegurar su participación en su explotación.

La divergencia de criterios entre Estados Unidos de América y Gran Bretaña que, por su primordial interés e indudable trascendencia, se ha procurado consignarla ampliamente, así como la falta de preparación —en general— de las delegaciones, imputable más bien a la escasa documentación precisa circulada de antemano, comprometieron el éxito de la Conferencia, determinando que la misma se prolongase y que —en definitiva— debieran adoptarse instrumentos diversos con soluciones totales y parciales para contemplar los distintos puntos de vista que no fué posible armonizar por completo.

Dichos instrumentos internacionales, son: el Convenio Provisional de Aviación Civil Internacional, la Convención Internacional de Aviación Civil, el Convenio relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales y el Convenio sobre transporte aéreo internacional.

En general, concuerdan con las sugerencias del Gobierno de los Estados Unidos de América, acerca de la conveniencia de establecer de inmediato y con carácter provisorio, las normas y los órganos para el período de transición, así como también quedaron ajustadas las normas y los órganos permanentes de la aeronavegación civil internacional, cuya vigencia no tenía tanto apremio, ya que su implantación se ha querido basar en la experiencia a recoger del funcionamiento del órgano provisorio.

Las libertades del aire, tan controvertidas, originaron los Convenios sobre tránsito y sobre transporte, que se diferencian en que el primero sólo comprende las dos primeras libertades, en tanto el segundo las incluye todas.

Ahora bien, en la actualidad estos dos últimos Convenios han sido dejados de lado, como se explicará más adelante y, en consecuencia, los únicos cuya ratificación interesa son los que se mencionan en el adjunto proyecto de ley, relativos a la organización provisional y permanente de la aviación civil internacional.

El Convenio provisional comprende 17 artículos, divididos en secciones y contiene titulares marginales, que facilitan su manejo.

Establece el organismo provisorio, con carácter técnico y consultivo, Estados soberanos, a fin de lograr la colaboración en el campo de la aviación civil internacional (Art. 1.º Sec. 1), mediante una Asamblea y un Consejo interino, con sede en Canadá (Art. 1, Sec. 2), hasta que entre en vigor la nueva Convención permanente o que, en otra Conferencia, se adopten distintas disposiciones, no pudiendo durar este período, en ningún caso, más de tres años (artículo 1.º, Sec. 3). Se otorga al Organismo provisional la personalidad jurídica compatible con las legislaciones nacionales (Art. 1.º, Sec. 4).

La Asamblea interina se reunirá ordinariamente una vez al año convocada por el Consejo interino, el cual también podrá convocarla a reuniones extraordinarias, asistiendo igual derecho a 10 Estados miembros. El voto corresponde a cada Tratado y el quórum queda fijado en la mayoría de los Estados miembros, tanto para las reuniones como para las votaciones y que, en este caso, es de los miembros presentes (Art. 2.º, Sec. 1). Las funciones de la Asamblea interina se indican en sus líneas generales, sin entrar en detalles (Art. 2.º, Sec. 2).

El Consejo interino se compone de no más de 21 Estados miembros, elegidos por la Asamblea interina por dos años y teniendo en cuenta: a) los Estados de mayor importancia en el transporte aéreo; b) los que más contribuyen a pro-

per facilidades para la navegación aérea civil internacional; y c) aquéllos cuya designación garantice que todas las principales regiones geográficas del mundo estén representadas (Art. 3.º Sec. 1). Los consejeros no podrán estar asociados activamente con las operaciones de ningún servicio aéreo internacional, ni tampoco interesados pecuniariamente en los mismos (Art. 3.º, Sec. 2). Los Estados miembros que no integren el Consejo Interino, podrán tomar parte en sus deliberaciones cuando se trate de asuntos que les interesen especialmente, sin voto; y en la controversias entre los mismos y los Estados miembros del Consejo, ni unos ni otros votarán tampoco (Art. 3.º, Sec. 4). Las principales funciones del Consejo Interino —aparte de las corrientes para tales cuerpos— versan sobre el registro de los contratos y acuerdos existentes relacionados con rutas, servicios, derechos de aterrizaje, instalaciones en aeropuertos u otras cuestiones de la aviación internacional de los Estados miembros o de sus líneas aéreas; dirigir y coordinar el trabajo de los Comités de transporte aéreo, de navegación aérea y de Convención de aviación civil internacional, cuyas funciones se especifican; y podrá actuar como árbitro en las diferencias entre los Estados miembros (Art. 3.º, Sec. 6).

El Jefe ejecutivo y funcionario administrativo del Organismo, será el Secretario General (Art. 4.º).

Los gastos comunes y particulares de los Tratados miembros, quedan determinados, así como que la Asamblea Interina podrá suspender el derecho de actuar a los Estados miembros morosos (Art. 5.º).

El Organismo desempeñará también las funciones asignadas por los Convenios de tránsito y de transporte aéreos internacionales, votando en esos casos —por supuesto— sólo los Estados miembros que los hayan aceptado (artículo 6.º).

El traspaso de las funciones, libros y propiedades del Organismo Interino al permanente, previsto en la Convención de Aviación Civil Internacional, se regula por lo dispuesto en esta Convención (artículo 7.º).

El Convenio provisional, luego de estructurar los cuerpos que componen el Organismo, en las disposiciones que se han reseñado, contiene las normas acerca de los vuelos sobre el territorio de los Estados miembros (artículo 8.º), para facilitar la navegación aérea (artículo 9.º); de las condiciones requeridas para las aeronaves (artículo 10); de la colaboración que se preste a los Estados miembros en materia de aeronavegación y de aeropuertos (artículo 11); y de los consorcios y servicios mancomunados (artículo 12).

Reviste singular importancia —y puede considerarse el cimiento sobre que se apoyan los acuerdos de Chicago— el reconocimiento de que cada Estado tiene la soberanía exclusiva y absoluta de la zona aérea que abarca su territorio (artículo 8.º, Sección 1), cuyo ámbito especial se define (artículo 8.º, Sección 2) sin perjuicio de que, en interés de la aeronavegación internacional, los Estados puedan admitir ya sean las dos o las cinco libertades, cuyo ejercicio aparentemente menoscaba su soberanía, si no se advierte y aprecia debidamente el origen convencional de las mismas, así como el régimen previsto, susceptible de mayor o menor alcance, de acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de adopción de tales franquicias y, sobre todo, de su eliminación total o parcial, mediante las denuncias que, según los casos, operan en términos más o menos cortos, pero siempre muy breves.

Para que no se propaguen las enfermedades contagiosas, por medio de la aeronavegación, se adoptan las medidas correspondientes (artículo 8.º, Sección 8).

Los Estados miembros determinarán las rutas de los servicios aéreos internacionales en sus territorios, pudiendo gravar la utilización de sus aeropuertos y demás instalaciones (artículo 8.º, Sección 9) reconociéndoseles, además, el derecho de registro sobre las aeronaves y el examen de los certificados, etc. (artículo 8.º, Sección 10).

Entre las medidas para facilitar la navegación aérea, consistentes en proporcionar los servicios respectivos (artículo 9.º, Sección 1) existe el compromiso para los Estados miembros de ayudar en lo posible a las aeronaves en peligro y de permitir a sus dueños o a las autoridades de origen, que intervengan en esos casos (artículo 9.º, Sección 2).

Las condiciones que deben llenarse respecto de las aeronaves, quedan determinadas en cuanto a la documentación (artículo 10, Sección 1) a los aparatos radio-trasmisores (artículo 10, Sección 2), a los certificados de navegabilidad (artículo 10, Sección 3), a las licencias del personal (artículo 10, Sección 4) y a los aparatos fotográficos (artículo 10, Sección 7).

Cuando un Estado miembro desee ayuda para porponer aeropuerto o para la navegación aérea en su terri-

torio, el Consejo Interino podrá concertar los acuerdos necesarios (artículo 11).

Se regulan y hasta se propician, porque el Consejo Interino puede sugerirlos, los consorcios de Estados miembros para los servicios aéreos internacionales (artículo 13).

Las obligaciones específicas de los Estados no miembros del Consejo, consisten en informarlo ampliamente de cuanto se relacione con la actividad aérea internacional (artículo XIII, Sección 1), incluso de lo que atañe a sus líneas aéreas internacionales (artículo XIII, Sección 2), a la vez que deberán aplicar cuanto antes las recomendaciones concernientes a la aeronavegación (artículo XIII, Sección 3).

Por último, se establecen las disposiciones relativas a la denuncia, cuyo plazo de seis meses debe destacarse por su brevedad y la correlativa poca duración de los compromisos resultantes de esta Convención, si llegara a ser inconveniente (artículo XIV); a la elección del primer Consejo Interino (artículo XVI), llevado a cabo en la Conferencia de Chicago, con el siguiente resultado y sin que se llenara un puesto reservado para la U. R. S. S. en caso de que aceptara el Convenio: A) por su importancia: 1. Estados Unidos de América, 2. Gran Bretaña, 3. Francia, 4. Brasil, 5. México, 6. Bélgica, 7. Holanda; B) por su contribución: 8. Canadá, 9. India, 10. Noruega, 11. Perú, 12. Irak; y C) por razones geográficas: 13. China, 14. Egipto, 15. Australia, 16. Chile, 17. Colombia, 18. El Salvador, 19. Checoslovaquia y 20. Turquía.

La Convención Internacional de Aviación Civil confiere carácter permanente a las estipulaciones del Convenio provisional, dentro de un ordenamiento semejante y con las variantes o preceptos relevantes, que se indicarán mediante las referencias más concretas posibles, para evitar inútiles repeticiones.

Se divide en cuatro partes: I. Navegación Aérea, II. Organismo Internacional de Aviación Civil, III. Transporte Aéreo Internacional y IV. Disposiciones finales.

En el primer Capítulo de la I parte, relativo a los principios generales y que comienza con el reconocimiento de la soberanía de los Estados (artículo 1.º, idéntico al que contiene el Convenio Provisional), interesa destacar el parágrafo C) del artículo 3.º, que dice: "Ninguna aeronave perteneciente a un Estado contratante volará sobre el territorio de otro Estado, o aterrizará en éste, sin autorización otorgada por acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las condiciones estipuladas".

En el segundo Capítulo, dedicado a los vuelos sobre el territorio de los Estados contratantes, se resuelve, contemplando los distintos intereses en juego, los casos de vuelo fuera de los servicios internacionales (artículo 5.º); los requisitos (permiso o autorización especial) para que se establezcan esos servicios (artículo 6.º), el cabotaje (artículo 7.º), las aeronaves sin piloto (artículo 8.º), las zonas prohibidas (artículo 9.º), derechos portuarios y otros gravámenes (artículo 15).

El capítulo tercero introduce y desarrolla el concepto de la nacionalidad de las aeronaves, materia no tratada en el Convenio provisional.

Se vincula la nacionalidad con la matrícula de la aeronave (artículo 17), sin que pueda existir más de una matrícula (artículo 18), cuya transferencia se registrará por la legislación nacional (artículo 19), imponiéndose el uso de distintivos de nacionalidad y matrícula (artículo 20) y con el compromiso de informar sobre la materia (artículo 21).

En el capítulo cuarto, relativo a las medidas para facilitar la navegación aérea, los Estados contratantes convienen en simplificar las formalidades reglamentarias (artículo 22) y en particular, los procedimientos aduaneros y de inmigración (artículos 23 y 24). Se elimina la posibilidad de embargar las aeronaves de servicio internacional a causa de las patentes de construcción, etc. (artículo 27).

En el capítulo quinto, sobre las condiciones que deben llenarse respecto de las aeronaves, sólo innova en realidad lo dispuesto acerca del transporte de material bélico, únicamente permitido con el consentimiento del Estado sobrevolado (Artículo 35).

El capítulo sexto, recomienda normas internacionales y procedimientos, procurando la mayor uniformidad posible para la aeronavegación (Artículo 37), previéndose el caso de imposibilidad de cumplirlas (Artículo 38) y el método para hacer constar las diferencias (Artículo 39), así como la validez de las respectivas constancias (Artículo 40) y la admisibilidad de efectos retroactivos limitados (Artículos 41 y 42).

El capítulo séptimo, de la II parte, relativo al Organismo Internacional de Aviación Civil, estructura sus cuerpos en forma análoga al Convenio Provisional: una Asamblea

y un Consejo, con los demás órganos necesarios (Artículo 42).

Los objetivos del organismo (Artículo 44) merecen reproducirse íntegramente, ya que ponen de manifiesto su razón de ser y la trascendencia de la obra a realizar:

"Los fines y objetivos del Organismo serán el fomento de los principios y la técnica de la navegación aérea internacional y el fomento del desarrollo y perfeccionamiento del transporte aéreo internacional, a fin de:

- A) Asegurar el progreso seguro y sistemático de la aviación civil internacional en el mundo.
- B) Fomentar las artes del diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos.
- C) Estimular el desarrollo de rutas aéreas, aeropuertos y ayudas para la navegación aérea en la aviación civil internacional.
- D) Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos.
- E) Evitar el despilfarro de recursos económicos que causa la competencia ruinosa, (la lucha contra la guerra de tarifas encuentra asidero en este precepto).
- F) Garantizar que los derechos de los Estados contratantes se respeten plenamente, y que todo Estado contratante tenga oportunidad razonable de explotar líneas aéreas internacionales.
- G) Fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional.
- H) Fomentar el desarrollo general de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos".

El capítulo noveno, organiza el Consejo según las normas ya conocidas, cuando se expuso la composición del Consejo interino, con el mismo número de integrantes (21), con mandato de tres años, elegibles también por su importancia, por su contribución a la aeronavegación y por su situación geográfica (Artículo 50), existiendo además, disposiciones semejantes acerca de la participación de Estados no miembros del Consejo, cuando se debatan asuntos que les conciernan (Artículo 53).

Las funciones del Consejo se han clasificado en preceptivas (Art. 54) y facultativas (Art. 55), abarcando toda la órbita administrativa de la aeronavegación.

El capítulo décimo, trata de la Comisión de Navegación Aérea, compuesta de doce miembros nombrados por el Consejo (Art. 56), cuya labor es asesora (Art. 57).

El capítulo undécimo, concierne al personal del organismo, regulando los nombramientos (Art. 58), su carácter internacional (Art. 59) y sus inmunidades y privilegios (Art. 60).

El capítulo duodécimo, se refiere a la financiación del organismo, presupuesto (Art. 61), sanciones a los morosos que consisten en la suspensión del voto en la asamblea y en el Consejo (Art. 62); gastos de las delegaciones, etc. (Art. 63).

El capítulo décimo tercero, prevé los acuerdos internacionales que puedan celebrarse sobre seguridad mundial (Art. 64) y para mantenimiento de servicios comunes (Art. 65).

El capítulo decimocuarto, con que empieza la Parte III de la Convención, establece el compromiso de informar al Consejo sobre el tráfico, estadísticas de costos y estados de cuentas que muestren, entre otras cosas, todos los ingresos y las fuentes de que deriven (Art. 67).

El capítulo decimoquinto, sobre aeropuertos y otras facilidades a la navegación aérea, se refiere a la designación de rutas y aeropuertos que corresponde a cada Estado (Art. 68).

De innegable importancia es la facultad conferida al Consejo de hacer recomendaciones para que se mejoren los aeropuertos, u otras facilidades relativas a la aeronavegación, así como que los Estados no infrinjan la Convención en caso de que no las pongan en práctica (Art. 69) y que, en cambio, podrán obtener acuerdos financieros para cumplirlos (Art. 70) o para mejorar por su iniciativa las instalaciones existentes (Art. 71), incluso la adquisición o uso de terrenos (Art. 72).

La Parte IV, de disposiciones finales, dispone la denuncia de la Convención sobre regulación de la navegación aérea de París, de octubre 13 de 1919 y de la Convención sobre aviación comercial de La Habana, de febrero 20 de 1928. (Art. 80).

Los acuerdos existentes, se registrarán en el Consejo (Art. 81) y, los incompatibles con esta Convención, se derogan (Art. 82). Los nuevos acuerdos también deberán registrarse (Art. 83).

El capítulo decimoctavo, trata de la solución de las controversias, en primera instancia, por el Consejo y, en ape-

lación, ante un tribunal de arbitraje ad-hoc, previo acuerdo entre las partes, o ante la Corte Permanente de Justicia Internacional (ahora, según la Carta de San Francisco, Corte Internacional de Justicia), previéndose y resolviéndose el caso de que la Corte no tuviese jurisdicción y que las partes no constituyeran el Tribunal arbitral (Arts. 84 y 85).

Expresamente se han separado las controversias sobre líneas aéreas internacionales, cuyo funcionamiento proseguirá mientras no sean apeladas las decisiones del Consejo (Art. 86), estableciéndose, además, la inapelabilidad de los laudos arbitrales y de los fallos de la Corte Internacional de Justicia (Art. 86).

Las sanciones por incumplimiento de las decisiones del Consejo o de las disposiciones de este capítulo impiden operar en las líneas aéreas y, en su caso, acarrear la suspensión del voto del Estado (Arts. 87 y 88).

El capítulo decimonono, concierne a la guerra y respeta la libertad de acción de los Estados contratantes (Art. 89).

El capítulo vigésimo, contiene las normas para aprobar y enmendar los anexos técnicos (Art. 90), requiriéndose al efecto las dos terceras partes de los votos, en el Consejo, y su vigencia empieza tres meses después, a no ser que la mayoría de los Estados contratantes los desapruében (Art. 90).

El capítulo vigésimoprimer, sobre ratificaciones, adhesiones, enmiendas y denuncias, también establece como el Convenio Provisional, la vigencia de este instrumento internacional cuando lo ratifiquen 26 países (Art. 91) y se diferencia de aquél, en que se podrá denunciar, luego de estar tres años en vigor, surtiendo efecto la denuncia a partir de un año de la respectiva comunicación, con lo que se ha buscado dotar de cierta estabilidad a tan importante experiencia en la vida de la navegación aérea internacional (Art. 95).

El capítulo vigésimosegundo, contiene las mismas definiciones de "Servicio Aéreo", "Servicio Aéreo Internacional" y "Línea Aérea" que el Convenio Provisional, agregándose la de "Escala para fines no comerciales" (Art. 96).

Aun cuando los Convenios sobre tránsito y transporte aéreos internacionales adoptados también en la Conferencia de Chicago, actualmente se considera que no serán ratificados, ofrecen sin embargo suficiente interés como para que, a título ilustrativo de la obra cumplida en dicha Conferencia, sean reseñados y se destaquen sus aspectos principales.

En tal sentido, cabe señalar que el Convenio sobre tránsito de los servicios aéreos internacionales comprende seis artículos, divididos en secciones.

Este Convenio, destinado a contemplar la posición de Gran Bretaña y otros países de la Conferencia, incluye sólo las dos primeras libertades: (I) la de sobrevolar sin aterrizar, y (II) la de aterrizar para fines no comerciales.

Los preceptos de especial interés, son los relativos al caso de concederse la segunda libertad, en cuanto atribuyen al Estado la facultad de requerir servicios comerciales razonables en los puntos de aterrizaje (Art. I, Sec. 3).

También merece comentarse el derecho reconocido a los Estados para rehusar o revocar el certificado o autorización a una empresa de transporte aéreo de otro Estado, sobre todo: "En cualquier caso en que no esté satisfecho de que nacionales de un Estado contratante posean una parte substancial de dicha empresa y la dirijan de hecho" (Art. I.o, Sec. 5).

El Consejo investigará, a instancia de parte, la aplicación del Convenio, y hasta podrá suspenderse por la Asamblea, a los Estados que lo infrinjan (artículo II sección 1).

Las controversias se resolverán de acuerdo con la Convención (artículo II, sección 2), a cuya vigencia se vincula la de este Convenio, pudiendo sin embargo, ser denunciado, con un año de anticipación, en cualquier tiempo, a diferencia de lo que ocurre con aquélla (artículo III).

El Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional, por su parte, comprende ocho artículos, también divididos en secciones.

Constituye, con la Convención, la labor de más envergadura de la Conferencia de Chicago y así como en aquélla se estructuró el organismo permanente de la aviación civil, en este Convenio se establecieron las reglas más amplias de la aeronavegación, con las cinco libertades del aire (artículo I, sección 1), puntualizándose sin embargo, que las obligaciones de los Estados contratantes respecto de las tres últimas franquicias: "sólo se refieren a servicios terminales que constituyan una línea razonablemente directa de partida y de llegada al territorio metropolitano del Estado cuya nacionalidad posea la aeronave".

Como en el Convenio sobre tránsito, cuando se concede la segunda libertad, la de aterrizar para fines no comer-

ciales, se podrán requerir servicios comerciales (artículo I, sección 3).

Se ha respetado el derecho de cada Estado al cabotaje aéreo, sin que puedan establecerse privilegios exclusivos de terceros Estados (artículo 1.º, sección 4).

Corresponde a cada Estado designar la ruta, en su territorio, de los servicios aéreos internacionales, así como los aeropuertos a utilizarse, cuyo uso y el de las demás instalaciones, pueden gravarse (artículo I, sección 5).

El derecho de cada Estado de rehusar o revocar el certificado o permiso a las empresas de transporte aéreo de otro Estado, se determina como en el Convenio de Tránsito (artículo I, sección 6).

Se derogan todas las obligaciones incompatibles con este Convenio y, en lo sucesivo, no podrán contraerse (artículo II, sección 1), sin perjuicio de poderse concertar acuerdos conforme al Convenio, los que deberán registrarse (artículo II, sección 2).

Merece destacarse el artículo III, que dice:

"Cada uno de los Estados contratantes se compromete a prestar la debida consideración a los intereses de los otros Estados contratantes, al establecer y explotar servicios terminales, a fin de no afectar injustificadamente sus servicios regionales o entorpecer el desarrollo de sus servicios terminales".

También cabe señalar especialmente que los Estados contratantes, respecto de la quinta libertad, la de transportar pasajeros, correo y carga a cualquier Estado, tienen el mayor margen de discrecionalidad expresamente establecido (artículo IV, sección 1), previniéndose sobre todo, un período brevísimo para renunciar o contraer los derechos y obligaciones correlativos, fijado en seis meses.

La aplicación del Convenio está sujeta a la misma regla que el de tránsito (artículo IV, sección 2), así como la solución de las controversias (artículo IV, sección 3); y el régimen de vigencia y denuncia (artículo V).

Como ha podido apreciarse, los instrumentos internacionales que se ajustaron en Chicago, pertenecen a la categoría de los convenios multilaterales que procuran amortizar intereses particulares para satisfacer necesidades comunes y que, por su misma generalidad, abarcan todo el orbe, integrado por la inmensa mayoría de países faltos de medios o de preparación para llevar a cabo, por sí mismos, esa obra, cuya ejecución sólo pueden cumplir unos pocos países especialmente dotados.

A través de la breve reseña de los textos de Chicago, se evidencia que la preocupación fundamental tenida en cuenta ha sido, precisamente, respetar en todo lo posible la situación de los participantes, que, como nuestro país, no están capacitados para acometer la magna empresa de la aeronavegación mundial, a la vez que se han limitado, también en todo lo posible las franquicias que deberán acordarse a los países llamados a ejecutar ese servicio público universal.

A los países, como el nuestro, que en realidad les cabe reducida actividad en la aeronavegación internacional, en razón de sus posibilidades inmediatas, se les reconoce los derechos básicos de autorizar:

A) El pasaje por su atmósfera, y

B) El establecimiento de las líneas aéreas internacionales.

Este último derecho supone intervenir en la fijación de las tarifas correspondientes, materia ésta que, como vimos, fué prevista también al enumerarse los objetos del organismo (Convención, artículo 44).

De manera, pues, que la obra de la Conferencia de Chicago abarca los sectores fundamentales de la aviación civil internacional y, en principio, merece la más favorable consideración.

En tal sentido se pronunció el Consejo de Ministros, en su sesión del 30 de abril ppdo.

Luego, sin embargo, el panorama cambió substancialmente, a raíz de la denuncia del Convenio sobre transporte aéreo internacional, efectuada el 25 de julio último, en virtud de que los demás países a quienes concernía principalmente, no demostraban el propósito de ponerlo en vigencia y, en consecuencia, dicho Gobierno hizo saber que no podía confiarse que el mencionado Convenio fuera el medio efectivo para el establecimiento de rutas aéreas internacionales.

La vía multilateral ensayada para consagrar las libertades del aire, no ha tenido éxito, y aunque este fracaso tal vez no sea definitivo, —por ahora al menos— deberán considerarse los Convenios sobre tránsito y sobre transporte aéreo internacional como valiosas contribuciones para resolver un problema todavía insoluble.

La obra de la Conferencia de Chicago, naturalmente, que-

da afectada por esas circunstancias, pero, el Convenio Provisional y la Convención no han perdido nada de su interés y más bien ahora puede adjudicárseles mayor importancia, por cuanto estructuran el organismo provisorio y definitivo de la aviación civil internacional, llamados a actuar frente a una realidad más compleja que la prevista, resultante de los entendimientos bilaterales que, en incesante aumento, vendrán a sustituir a aquellos Convenios.

Tales son los antecedentes y los fundamentos del adjunto proyecto de ley, cuya exposición completa se ha extendido tanto, no sólo por la evidente importancia de la materia, sino también porque debía consignarse, en esta oportunidad, todo el dilatado y laborioso proceso de gestación de los instrumentos internacionales sometidos a la Asamblea General, restando únicamente, encarecer la urgencia del pronunciamiento legislativo, a fin de que nuestro país participe cuanto antes en la organización internacional de la aviación civil.

Reitero a la Asamblea General las seguridades de mi más alta consideración. — JUAN JOSE AMEZAGA. — EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA. — PEDRO A. MUNAR.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Apruébanse el Convenio Provisional de Aviación Civil Internacional y la Convención Internacional de Aviación Civil, adoptados en la Conferencia de Chicago, el 7 de diciembre de 1944.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Montevideo, octubre 30 de 1946.

EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA.
PEDRO A. MUNAR.

NUEVO MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO

Poder Ejecutivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Defensa Nacional.

Montevideo, abril 11 de 1947

A la Asamblea General:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 21 del artículo 157 de la Constitución de la República, —tengo el honor de someter a la consideración de la Asamblea General el adjunto proyecto de ley, para que se apruebe la Convención de Aviación Civil Internacional, subscripta en Chicago el 7 de diciembre de 1944.

Dicho instrumento internacional ya fué sometido a la Asamblea General, con el Mensaje de fecha 30 de octubre de 1946, en el cual se exponían ampliamente los antecedentes y fundamentos que evidenciaban su importancia y, al reiterarlos ahora, debo encarecer la urgencia del pronunciamiento legislativo, a fin de que nuestro país se encuentre en condiciones de participar, cuanto antes, en la organización internacional de la aviación civil.

Reitero a la Asamblea General, las seguridades de mi más alta consideración. — TOMAS BERRETA. — MATEO MARQUES CASTRO. — PEDRO A. MUNAR.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Apruébase la Convención Internacional de Aviación Civil, adoptada en la Conferencia de Chicago, el 7 de diciembre de 1944.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Montevideo, octubre 30 de 1946.

MATEO MARQUES CASTRO.
PEDRO A. MUNAR.

ANTECEDENTES

Poder Ejecutivo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Defensa Nacional.

Montevideo, 16 de mayo de 1951.

A la Asamblea General:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 21 del artículo 157 de la Constitución de la República, tengo el honor de

universitaria sabrá poner en contribución la delicada sensibilidad, la fina intuición y el noble sentimiento de que es poseedora la personalidad femenina, y que encauzados y regidos por el saber científico han de cristalizar en nuevos enfoques, sugerencias y soluciones de sello personalísimo; pero es a la vez una reconocimiento justiciero de la trascendencia innegable de la labor de la mujer médica que ha logrado ya, sea en el campo de la investigación como en la aplicación práctica de la medicina y que significan aportes efectivos para el progreso de esta disciplina del saber humano.

Por todo ello, el Ejecutivo considera justificado el apoyo económico al Congreso de referencia y confía en que el Parlamento, con igual criterio, prestará su sanción al proyecto adjunto, facilitando con ello el desarrollo y cumplimiento normal del programa trazado por las autoridades organizadoras de ese certamen.

Con tal motivo, se complace en renovar a la Asamblea General las seguridades de su mayor consideración. — **ANDRES MARTINEZ TRUEBA.** — **EDUARDO BLANCO ACEVEDO.** — **HECTOR ALVAREZ CINA.**

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para tomar de Rentas Generales la suma de diez mil pesos (\$ 10.000.00), destinada a la financiación del Congreso Latinoamericano de Mujeres Médicas, a realizarse en Montevideo en diciembre de 1951.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Montevideo, 23 de julio de 1951.

EDUARDO BLANCO ACEVEDO. — **HECTOR ALVAREZ CINA.**

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente,

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para tomar de Rentas Generales la suma de diez mil pesos (\$ 10.000.00), destinada a la financiación del Congreso Latinoamericano de Mujeres Médicas, a realizarse en Montevideo en diciembre de 1951.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de noviembre de 1951.

ARTURO LEZAMA, Presidente. — **Gonzalo de Salterain Herrera,** Prosecretario.

SEÑOR PRESIDENTE. — En primera discusión general.

SEÑOR BERRO. — Pido la palabra.

Quiero decir breves palabras para rectificar algo que dije el otro día, porque cuando me equivocó no me cuenta, sino que creo que es un deber, manifestar que he cometido un error.

Dije que este Congreso se iba a realizar con parte de los fondos que votamos para el Congreso de Pediatría y no es así. Mi confusión se originó en que anteriormente vino un mensaje destinando en conjunto \$ 50.000.00 para el Congreso de Pediatría y \$ 10.000.00 para este Congreso, para el cual están en viaje alrededor de cincuenta médicas de distintos países de América. Hice también la crítica de por qué las mujeres se reunían solas cuando nosotros, en nuestros Congresos, las aceptábamos con el mayor gusto.

(Apoyados).

— Me ha rectificado igualmente la Presidenta de la Comisión Organizadora, profesora Saldún de Rodríguez, por mis críticas injustificadas, ya que ellas piensan invitar a los hombres para que concurren a las sesiones y hasta han pedido a algunos de ellos —entre otros a mí, que no voy a poder hacerlo porque estoy atareado con otras cosas— que dicten una serie de conferencias.

Dejo, pues, rectificadas los dos errores que cometí.

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar si se aprueba en discusión general.

(Se vota: Afirmativa).

— En discusión particular.

SEÑOR ECHEGOYEN. — ¿Me permite, señor Presidente?

Quisiera saber por qué se hacen estos Congresos Médicos con mujeres exclusivamente, siendo que la ciencia no puede hacer distinción de sexos.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Acaba de dar las explicaciones el señor Senador Berro.

SEÑOR ECHEGOYEN. — No veo por qué, en el orden científico, ha de haber diferencia entre los sexos.

SEÑOR GONZALEZ CONZI. — Sin embargo, señor Senador, en la ciencia señala esa diferencia...

SEÑOR ECHEGOYEN. — No veo por qué se han de agrupar por sexos.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Parece que se va a corregir ese criterio.

SEÑOR ECHEGOYEN. — Era simplemente para conocer el motivo.

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — ¿Me permite, señor Presidente?

Creo que hay interés en que las mujeres tituladas hagan por separado, en cierto modo, una demostración de fuerzas científicas.

Este es un Congreso de Medicina Social en el cual, especialmente, van a tratarse temas relacionados con Pediatría, donde las mujeres de nuestro país tienen un camino tan adelantado. De modo que no critico que se reúnan las mujeres en este sentido, sino que, por el contrario, desearía que las profesionales abogadas hicieran lo mismo.

En el próximo Congreso de Abogados, las mujeres abogadas van a tener dos días expresamente para ellas, para tratar temas especiales. Esto no quiere decir que no inviten también a los abogados para que tomen la palabra.

En ese sentido, lo que es crítica para el señor Senador, para mí es motivo de aplauso, ya que me gusta ver a las mujeres reunidas, aún por gremios separados.

SEÑOR ECHEGOYEN. — La señora Senadora, posiblemente llevada por un espíritu, si se me permite, gremial...

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — Puede ser.

SEÑOR ECHEGOYEN. — ...ha llevado más lejos la interpretación de lo que mis modestas palabras podían permitir. No he criticado esto. Me interesaba conocer por qué, en el orden científico, se agrupaban los médicos por sexos, siendo así que la finalidad es común.

Se trata de la investigación de la verdad y de su aplicación con fines de previsión y de terapéutica.

Bien; si la finalidad es común y la pediatría la hacen los hombres y las mujeres médicos, no vea por qué tal separación, y preguntaba, simplemente. No criticaba: preguntaba, modestamente, si había alguna razón para separar a las mujeres de los hombres, tratándose de un propósito científico común.

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Terminó el señor Senador?

SEÑOR ECHEGOYEN. — No he conseguido que se me aclare el punto planteado.

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — Lo único que puedo decir, que quizá halague al señor Senador, es que esas médicas que se van a reunir, han recibido su enseñanza de los hombres y, con esto, quedamos a mano.

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 1.º.

(Se vota: Afirmativa).

Queda aprobado el proyecto en primera discusión general y particular.

SEÑOR GRAUERT. — Moción para que se suprima la segunda discusión.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del señor Senador Grauert.

(Se vota: Afirmativa).

— Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

Continúa la orden del día con la consideración del proyecto por el cual el Ministerio de Ganadería y Agricultura organizará concursos anualmente de huertas familiares, debiendo suministrar semilla y asesoramiento técnico gratuito a los participantes.

Léase.

(Se lee:)

Carpeta 449 de 1951. Comisión de Fomento, Repartido 192 de 1951.

Poder Ejecutivo

Ministerio de Ganadería y Agricultura

Ministerio de Hacienda

Montevideo, enero 30 de 1950.

A la Asamblea General:

Tengo el honor de dirigirme a ese alto Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el presente mensaje y proyecto de ley, por el cual se establece un régimen de concursos de huertas familiares, en predios de zonas suburbanas, en ciudades y pueblos del interior de la República.

Propósitos

Los fines que se persiguen con la organización de los precitados concursos, basados en la adjudicación de premios son, en primer término, el de estimular la formación de huertas en las zonas suburbanas de las ciudades y pueblos del interior y, en segundo lugar, demostrar a esas poblaciones la posibilidad de lograr por sus propios medios, parte de su alimentación.

Tal iniciativa se justifica especialmente en aquellas regiones del país cuyas zonas suburbanas se caracterizan por una escasez de medios económicos; así, los cultivos hortícolas pueden contribuir sensiblemente a solucionar el problema de su alimentación.

El hecho de haberse producido en los últimos años, fenómenos climáticos adversos que afectaron por igual a las producciones agrícola y ganadera, incidieron entre varios factores, sobre la elevación del costo de las subsistencias, obliga a encarar la producción rápida de otros alimentos, tales como las hortalizas, las que, si bien no llenan las necesidades totales sustitutivas, contribuyen en cambio a atenuar la gravedad del problema alimenticio.

Experiencia recogida en los concursos realizados.

Antecedentes

Aplicando el criterio expuesto en párrafos anteriores, la Dirección de Agronomía —por intermedio del Laboratorio de Fruticultura— realizó oportunamente y con carácter de ensayo durante el año 1944, Concursos de Huertas Familiares en las plantas suburbanas de las ciudades de Artigas y Melo. Los 150 horticultores participantes, y la abundante producción hortícola obtenida, demostraron claramente el exitoso resultado de esos certámenes y la aprobación que se dió a los mismos en dichas poblaciones.

Por otra parte, se ha logrado formar un núcleo de excelentes trabajadores que constituyen, fuera de toda duda, un ejemplo altamente beneficioso para el resto de los pobladores que se hallan en condiciones de dedicarse a esos cultivos.

Ayudado en la experiencia recogida en los precitados concursos, el Poder Ejecutivo concretó en un mensaje y proyecto de ley que lleva fecha 1.º de octubre de 1946, las normas que debían regirlos, estableciéndolos como una institución de carácter anual.

Esto ha demostrado, en el lapso transcurrido, que los fundamentos que dieron mérito a aquella iniciativa no solamente subsisten, sino que se han robustecido como lógica consecuencia de la evolución experimentada por la población y las características de nuestra campaña. En el presente mensaje y proyecto de ley, se recogen los puntos sustanciales del anteriormente mencionado, adaptado a las condiciones actuales.

En forma concordante con los propósitos perseguidos en la materia, el Poder que me honro en presidir remitió, asimismo, a esa Asamblea General, con fecha 22 de setiembre de 1948 un proyecto de ley por el cual se crearía un Semillero de Multiplicación y Adaptación Hortícola, cuya denominación por sí sola, es una clara definición de sus objetivos.

Posibilidades de comercialización de una futura producción hortícola incrementada

Además de proveer a la alimentación de las familias de los concursantes, los excedentes de los productos hortícolas obtenidos en esos certámenes pudieron ser destinados para el abastecimiento de la población de las zonas urbanas.

De esta manera, se comprende fácilmente que su generalización permitiría, una vez logrado los fines inicialmente expuestos, alcanzar volúmenes tales de producción, que permitieran su comercialización en mayor escala; sus consecuencias inmediatas serán el mejoramiento del régimen dietético de la mayoría de las poblaciones del interior, in-

roduciendo en el mismo, elementos de alto valor alimenticio, a precios que los hagan accesibles a todos.

Premios estímulos

La adjudicación de premios a los mejores horticultores participantes, es un estímulo lógico, por cuanto configura una recompensa al esfuerzo individual.

Estos premios aseguran la dedicación del concursante y establecen una competencia en la labor de los hortelanos, todo lo cual allana el camino hacia una horticultura más racional y provechosa.

En este orden de ideas, siempre se ha estimado conveniente que los premios a otorgarse puedan ser integrados hasta por un 50 o/o del monto de los mismos, en especies, tales como semillas, herramientas, abonos, etc., de acuerdo con las características económicas y culturales y disponibilidades de la zona de que se trate, con lo cual se evitaría la eventualidad de que los beneficiados inviertan las sumas recibidas en forma poco aconsejable a los fines de sus economías, y se les hace poseedores —a la vez— de útiles de trabajo que los habilitarían para asegurar el éxito de sus labores futuras, en beneficio propio y de la comunidad.

Estructura del Plan

De acuerdo con los principios expuestos, se ha estructurado el plan cuyos lineamientos generales son los siguientes:

Zonas de realización.

La Dirección de Agronomía, por intermedio de su Sección Especialización, indicará anualmente los departamentos en los cuales se realizarán los Concursos de Huertas Familiares. Cada año se fijará, a esos efectos, hasta 20 localidades, tomando en cuenta, especialmente, aquellas en donde exista especial interés en fomentar los cultivos hortícolas.

Epoca de iniciación y terminación de los concursos.

Estos se iniciarán en otoño y terminarán en el mes de noviembre, durante el cual se realizaría la distribución de premios. En esta forma se persigue el fomento de la producción hortícola de invierno, la que se beneficiará con las precipitaciones pluviométricas, tan abundantes en esa estación como necesarias al desarrollo de dichos cultivos.

Por otra parte, la utilización del riego, imprescindible para el desarrollo hortícola, en época de precipitaciones escasas, es una práctica poco aplicada aún en nuestro país. Estas consideraciones, no hacen aconsejable iniciar los Concursos en épocas estivales, ya que al no tenerse el auxilio del riesgo, se llegaría sin ninguna duda, al fracaso.

Colaboraciones.

Se prevé la colaboración de los Servicios Agronómicos, las Intendencias Municipales, las Jefaturas de Policía y las Escuelas Agrario-Industriales, los que serán de invalorable utilidad en la integración de los Jurados y en la solución de los múltiples problemas inherentes a los concursos, tales como preparación de almácigos, ubicación de los predios, difusión, etc.

Distribución de plantas y semillas.

Estas se entregarán en forma gratuita y de acuerdo con normas que tiendan a asegurar el logro de los fines previstos.

Teniendo en cuenta que se trata de proveer de alimentos a la población de campaña, se estima conveniente fomentar cultivos rústicos de poca exigencia en cuanto a cuidados culturales, abundantes en producción y con probabilidades de obtener buenos rendimientos.

Asesoramiento técnico.

Durante el desarrollo del Concurso, los horticultores recibirán asesoramiento por parte de los técnicos de los Servicios Agronómicos y Servicios Especializados del Laboratorio de Fruticultura. Este asesoramiento cumplirá con la finalidad de allanar las dificultades que puedan presentarse a los plantadores en esta clase de cultivos y a la vez cumplir una misión didáctica, dictando normas adecuadas, con el fin de obtener en superficies reducidas, el máximo de producción.

Distribución de premios.

La distribución de premios a los concursantes que se hicieron acreedores a los mismos, se realizará en acto público por entender que ello es un estímulo para la prosecución de

esas tareas en el futuro, y estará a cargo de una Comisión integrada por los señores Intendente Municipal, Jefe de Policía, Jefe de los Servicios Agronómicos y otras autoridades del departamento de que se trate, como también por un Delegado del Laboratorio de Fruticultura.

Cálculos de Gastos

Para mayor ilustración de los señores Legisladores, se ha estructurado la siguiente planilla, que revela la forma en que se efectuarán las inversiones estimadas como necesarias para la realización de los Concursos de Huertas Familiares.

Premios:

Un primer premio "Campeón"	\$ 100.00	\$ 100.00
Tres primeros premios	70.00 c/u.	210.00
Cinco segundos premios	50.00 "	250.00
Diez, terceros premios	35.00 "	350.00
Veinte cuartos premios	25.00 "	500.00
Total en unalocalidad		\$ 1.410.00
Total en 20 localidades		\$ 28.200.00

Gastos.

Costo de la semilla, fraccionamiento, etc. . .	\$ 10.000.00
Papel, sobres, embalajes, hilos, etc.	" 2.000.00
Gastos de flete aproximado	" 1.000.00
Otros gastos imprevistos	" 2.000.00
Gastos de locomoción y viáticos del personal por concepto de desplazamientos que requie- rará la labor de contralor de los trabajos re- queridos por el Concurso	" 5.000.00
Gastos suplementarios para colaboración con otros Certámenes e Instituciones que se or- ganicen independientemente	" 1.800.00
Total general anual	\$ 50.000.00

En la seguridad de que el adjunto proyecto de ley, por la importancia que reviste, merecerá preferente y pronta sanción por parte de esa Asamblea General, aprovecho la oportunidad para reiterar a ese alto Cuerpo las seguridades de mi más distinguida consideración.

LUIS BATLLE BERRES. — CARLOS L. FISCHER. — NILO R. BERCHESE.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º El Ministerio de Ganadería y Agricultura, por intermedio de la Dirección de Agronomía, organizará anualmente concursos de huertas familiares en predios de zonas suburbanas en ciudades y pueblos del interior de la República, debiendo suministrar semillas y asesoramiento técnico gratuito a los participantes.

Art. 2.º Las Jefaturas de Policía, Intendencias Municipales y Escuelas Agrario Industriales deberán colaborar con el Ministerio de Ganadería y Agricultura en la medida más amplia posible y siempre que esta Secretaría de Estado o la Dirección de Agronomía se lo solicite.

Art. 3.º En los concursos podrán intervenir todas aquellas personas de escasos recursos económicos, debiendo el Ministerio de Ganadería y Agricultura compensar a los triunfantes con premios en metálico y en especies.

Art. 4.º Destinase, anualmente, a los efectos establecidos en los artículos 1.º y 3.º la suma de \$ 50.000.00 (cincuenta mil pesos) a tomarse de Rentas Generales, que la Contaduría General de la Nación pondrá a disposición del Ministerio de Ganadería y Agricultura, en cuenta especial denominada "Fomento y Concurso de Huertas Familiares".

Art. 5.º El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 6.º Comuníquese, etc.

Montevideo, Enero 30 de 1950.

CARLOS L. FISCHER. — NILO R. BERCHESE.

Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º El Ministerio de Ganadería y Agricultura, por intermedio de la Dirección de Agronomía, organizará anualmente concursos de huertas familiares en predios de zonas urbanas y suburbanas en ciudades y pueblos del interior de la República, debiendo suministrar semillas y asesoramiento técnico gratuito a los participantes.

Art. 2.º Las Jefaturas de Policía y Escuelas Agro-Industriales deberán colaborar con el Ministerio de Ganadería y Agricultura en la medida más amplia posible y siempre que esta Secretaría de Estado o la Dirección de Agronomía se lo solicite. También en este caso podrán colaborar los Ejecutivos Municipales.

Art. 3.º En los concursos podrán intervenir todas aquellas personas de escasos recursos económicos, debiendo el Ministerio de Ganadería y Agricultura compensar a los triunfantes con premios en metálico y en especies.

Art. 4.º Destinase en forma exclusiva, a los efectos establecidos en los artículos 1.º y 3.º, la suma de pesos 50.000.00 (cincuenta mil pesos) anuales a tomarse de Rentas Generales, que la Contaduría General de la Nación pondrá a disposición del Ministerio de Ganadería y Agricultura, en cuenta especial denominada "Fomento y Concursos de Huertas Familiares".

Art. 5.º El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 6.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de noviembre de 1951.

ARTURO LEZAMA, Presidente; Gonzalo de Salazarín Herrera, Prosecretario.

SEÑOR PRESIDENTE. — En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar

Se vota: Afirmativa.

—En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se empieza a leer).

SEÑOR GRAUERT. — Moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Grauert.

Se vota: Afirmativa.

—En discusión el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

—En discusión el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

—En discusión el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

—En discusión el artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

—En discusión el artículo 5.º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Se vota: Afirmativa.

—El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto en primera discusión general y particular.

SEÑOR GRAUERT. — Moción para que se suprima la segunda discusión.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Grauert.

Se vota: Afirmativa.

—Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo

32

Continúa la orden del día con la consideración del asunto relacionado con la concesión de la venia al Poder Ejecutivo para designar al doctor Oscar María Infrantozzi Soñla, para desempeñar la Fiscalía Letrada Departamental de Flores.

SEÑOR GRAUERT. — Pido que se levante la sesión, ya que no hay número en Sala.

SEÑOR ARRILLAGA SAFONS. — Que se llame a Sala. Hay una Comisión que está reunida, que preside el señor Senador Forteza, en la que están mis compañeros de bancada señor Senador Ferreiro...

SEÑOR PRESIDENTE. — Se está llamando permanentemente a Sala. La Mesa no tiene medios para comunicar

a los señores Senadores recalcitrantes a que concurran al recinto de sesiones.

SEÑOR GAMBA. — Esa Comisión está preparando el material para la sesión de las 22 horas.

SEÑOR ARRILLAGA SAFONS. — El Senado votó una autorización y yo solicito que se rectifique esa votación y se le saque esa facultad.

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — El Senado votó una moción del señor Senador Grauert en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta las 22 horas. Por esa razón se han postergado asuntos urgentes, que veníamos reclamando su consideración desde hace días, como el que figuraba en quinto término, relacionado con la ampliación del plazo para pagos sin recargos de deudas por aportes jubilatorios atrasados a la Caja de Jubilaciones.

Parecería que existe el propósito de sacar asuntos que interesan a un grupo de Senadores y que luego no haya número y queden sin aprobar estos proyectos de tanta importancia.

Además creo que el propósito de hacer un cuarto intermedio, era para dar tiempo a los señores Senadores para cenar, por lo que, si seguimos sesionando, no podrán los Senadores disponer de ese tiempo.

Por eso, hago moción para que se pase a cuarto intermedio.

SEÑOR ZAVALA MUNIZ. — Me permite, señor Presidente?

No voy a contestar la suposición del señor Senador Fernández Crespo, porque no tiene razón y porque además, yo que en este momento pido que continúe la sesión, no puedo tener ningún interés oculto en ello, pues el asunto, que debemos considerar es una venia para la designación de un Fiscal en un Departamento, sobre la cual hay opinión hecha y en un minuto la podemos resolver. Así no dejaremos a ese Departamento sin Fiscal.

SEÑOR ARROYO TORRES. — Lo que debemos hacer es pasar a sesión secreta.

SEÑOR PRESIDENTE. — No hay quórum suficiente para considerar este asunto.

SEÑOR ARROYO TORRES. — La Mesa tiene que disponer el pase a sesión secreta, aunque no hay número para considerar este asunto y, luego, en sesión secreta, veremos lo que pasa.

SEÑOR PRESIDENTE. — El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace).

En sesión pública.

SEÑOR PRESIDENTE. — En sesión secreta ha sido concedida la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado Departamental de Flores, al doctor Oscar María Infantez Soba; pasa nuevamente a Comisión la solicitud de venia para ascender a Coronel, al Teniente Coronel, don Miguel Sánchez Gomeza; y en la solicitud de venia para ascender a Coronel al Teniente Coronel don Alfonso Elbio Roca, no se pudo tomar resolución por falta de quórum.

—No hay número en Sala.

SEÑOR FORTEZA. — Solicito, señor Presidente, que se llame a Sala, porque no hay derecho de que, después que el Senado ha otorgado 8, 10, 15 o 20 venias, se deje ésta sin considerar, máxime tratándose —como se trata en este caso— de un distinguido militar, un hombre joven que reclamó ante el Tribunal lo que él creyó su derecho y que el Tribunal se lo ha otorgado...

SEÑOR PRESIDENTE. — Permítame, señor Senador. No hay número en la Casa, en consecuencia, se levanta la sesión.

(Así se hace, siendo las 21 horas y 15 minutos).

Francisco Montero de la Bandera
Director de Taquígrafos

